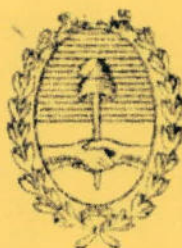




0F16378326

PROVINCIA DE TUCUMAN



JUZGADO CIVIL CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA 1º NOMINACIÓN

Fecha de Inicio: 11/11/2013 - Hora: 10:14 - N° de Exp: 480/13

ACTOR: MERCADO RUBEN OSCAR

DEMANDADO: ALPARGATAS SAIC Y OTRO

CAUSA: ENFERMEDAD ACCIDENTE / PROFESIONAL

JUEZ: Dra. Maria Guadalupe Aiquel

SECRETARIO Dra. M. Viviana Donaire de Schurig

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

1

FORMULARIO PARA EL INGRESO DE CAUSAS DATOS A INCORPORAR – MESA DE ENTRADAS CIVIL

08-11
1200

EXPTE. N°

DESCRIPCIÓN

1.- OBJETO DEL JUICIO INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD DEL TRABAJO

DESCRIPCIÓN

2.- MODO DE PROCESO CONCILIACION Y TRAMITE

3.- DATOS ABOGADO/S

Apellido/s y Nombre/s	P/A	Domicilio/s Constituido/s	Localidad	Casillero
MIRANDE JOSE LUCAS	A	LAMADRID 377 6to "B"	S.M. Tuc.	108

4.- DEFENSORIA N°

5.- ACTORES, PETICIONANTES O CAUSANTES

Apellido/s y Nombre/s	Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y N°Doc	CUIT
MERCADO RUBEN OSCAR	LOTE 12	SANTA ANA	10.813.556	

6.- DEMANDADOS (Datos Conocidos)

Apellido/s y Nombre/s	Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y N°Doc	CUIT
ALPARGATAS SAIC	RUTA 38 KM 1461	AGUILARES		
LA TART SA	SAN LORENZO 1170	S.M.de.TUC		

7.- FUERO DE ATRACCION
JUZG. EXPTE. CONEXO

8.- OFICIOS LEY 22.172
Juez oficiante:
Juzgado y fuero:
Jurisdicción:

9.- MONTO DEL JUICIO
\$ u\$s
X

10.- TASA DE JUSTICIA
Abona tasa minima
Abona tasa íntegra
Exento de pago

11.- BONOS PROF.
No Adjunta
Eximido

12.- LEY 6.059
No Abona

LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN EL CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-

08/11/2013.
FECHA

JOSE LUCAS MIRANDE
ABOGADO
MAT. PROF. 5654 L° L F° 150
MAT. CONCEP. 1495 L° 01 F° 41
MAT. FED. 112 L° 501
FIRMA Y SELLO DEL LETRADO DECLARANTE

El presente formulario deberá completarse con letra legible (en forma manual o imprenta). Toda raspadura o enmienda deberá ser salvado previo a la firma del profesional.-

El número de expediente será completado en forma manual al momento de la asignación.-

INICIO JUICIO.-

SR. JUEZ DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE

JUICIO: MERCADO RUBEN OSCAR VS. ALPARGATAS SAIC y/o S/INDEMNIZACION
POR ENFERMEDAD DEL TRABAJO.- EXPTE:

JOSE LUCAS MIRANDE, abogado del foro local, con domicilio en calle Lamadrid 377 6to "B", San Miguel de Tucumán, Tucumán y constituyéndolo a los efectos legales en casillero de notificaciones n° 108, a S.S. respetuosamente digo:

I) PERSONERÍA:

Conforme lo acredito con original de Poder Ad-litem que acompaño, y que declaro bajo juramento estar vigente a la fecha, soy apoderado del Sr. **MERCADO RUBEN OSCAR, D.N.I. 10.813.556**, casado, nacido el 25/05/53, edad de 59 años, argentino, mayor de edad, con domicilio, Lote 12 Santa Ana, Río Chico, Provincia de Tucumán.-

En tal carácter me apersono, constituyo domicilio legal y solicito la correspondiente intervención de ley.-

II) OBJETO:

Que cumpliendo con el mandato conferido, vengo -en nombre y representación de mi poderdante- a promover demanda en contra de la empresa -**ALPARGATAS SAIC**-, domiciliada en Ruta 38, Km. 1461, Aguilares, Provincia de Tucumán, y en forma solidaria contra de **LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART SA**, con domicilio San Lorenzo N° 1170 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por la suma de pesos que se cuantificará al momento que la causa se encuentre radicada en autos en concepto de indemnización por enfermedad del trabajo; conforme consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. Con más los intereses, costos y costas

Asimismo, en forma subsidiaria y en el supuesto caso de no ser responsable la codemandada **LA CAJA ART SA** en los términos del Código Civil en su calidad de solidariamente responsable, solicito se condene a la nombrada en los términos de la ley 24.557 por el monto que oportunamente se determinará, con más los intereses, costos y costas.-

III) HECHOS:

III.a) ANTECEDENTES – TAREAS¹

¹ Dejo expresa constancia que el relato de los hechos son una derivación concreta de lo expuesto por el actor; entendiendo que pueden existir algún error involuntario en relación a los años que ejecutó cada una de las tareas, entendiendo que la precisión deberá surgir del legajo personal.

JOSE LUCAS MIRANDE
ABOGADO
MAT. PROF. 5554 L° L F° 150
MAT. CONCEP/1395 L° 01 F° 41
MAT. FED. T° 112 F° 501

Con fecha el día **21/10/74** el actor ingresó a prestar servicios en relación de dependencia jurídica laboral para la firma denominada ALPARGATAS SAIC, con domicilio en Ruta 38 Km. 725 Aguilares, Provincia de Tucumán. Dicho empresa tiene como principal actividad la producción de Zapatillas.-

A las órdenes y en beneficio de la firma indicada realizaba tareas con categoría profesional de Operario del CCT que rige la actividad desempeñada por su empleadora. *Es de destacar que al ingreso se encontraba en óptimas condiciones de salud, sin que presente ninguna merma o afección en su integridad psicofísica, conforme debería constar en su legajo personal*².

Se desempeñó en diferentes sectores hasta su jubilación por incapacidad absoluta, realizando múltiples funciones. Cumplió con una carga horaria de 8hs diarias de Lunes a Sábado en turnos rotativos, fue usual durante los primeros años realizara jornadas extendidas que superaban las 16hs -horas extras/dos turnos- de acuerdo a los requerimientos de la empresa, horas que al ser abonadas deben constar en el legajo personal del accionante.

Siempre que trabajó de sentado lo hizo en sillas con deplorable estado de conservación que poseían bordes rígidos y presionaban su cuerpo durante largas horas, generando fuertes dolores e incomodidades en las partes blandas del mismo, lo que derivaba que el actor asuma posturas anti-ergonómicas en forma sostenida y no natural con su columna y cervicales inclinados hacia adelante³. Sin embargo mayormente los hizo de parado *ortostatismo* (posición de pie prolongada) con la misma postura columnaria que de sentado, es decir inclinando sus cervicales, realizando durante décadas un sobre-esfuerzo físico producto de las labores encomendadas, que le derivaron en una presión hidrostática de sus miembros, junto a presión intraabdominal y torácica, soportando a su vez temperaturas ambientales excesivas a lo largo de toda la jornada laboral.

El Actor Ingresó a prestar servicios en el Sector **MOLDEADO**, desempeñándose hasta el año 1980. Sus funciones consistían en **"fileteado, rebabado y plantillado"** de los calzados, tareas que eran estrictamente manuales. Trabajaba de parado frente a un mesón, adelante suyo recorría una cinta transportadora donde extraía los calzados terminados por pares (Flecha Estándar y Flecha 200) y comenzaba a rebababar (sacar gomitas que le sobra del calzado del inyectado) usando sus manos; seguidamente las plantillaba y por último con una especie de pistolita fliteaba a presión el calzado (pintura roja o azul) lo que implicaba una tarea desgastante y repetitiva. Debía cumplimentar una tarea diaria de 500 pares de zapatillas, debiendo permanecer parado con sus cervicales inclinadas hacia adelante y con ambos brazos suspendidos durante toda la jornada laboral lo que generaba un cansancio de piernas, hombros, espalda y

² Ley 19.587 Art. 9: Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador; a) disponer el examen pre-ocupacional y revisión periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud;

columna. La empresa jamás le proporcionó elementos de seguridad para su salud psicofísica (protectores auditivos, lumbares, etc).

Seguidamente es trasladado al sector **SINFÍN**, donde se moldeaban botas de goma, desempeñándose hasta el año 1984. Sus funciones encomendadas eran de **"rebabador"** con pequeña máquina, funciones que realizaba de sentado frente a un mesón donde corría una cinta transportadora (NORIA) extrayendo las botas por pares para el rebabado. La postura física era de sentado con sus cervicales inclinadas hacia adelante y sus brazos suspendidos durante toda la jornada laboral. El sector se caracterizaba por su enorme contaminación sonora debido al ruido producido por la Noria y las máquinas inyectoras, a su vez el ambiente de trabajo se caracterizaba por las altas temperaturas en que mi mandante estaba expuesto.-

Posteriormente es trasladado al sector **ALPARGATERIA**, para cumplir funciones de **"preparador"**. En dicho sector un operario urdidor, entregaba al actor la planta de yute terminada y éste debía preparar el calzado con sus manos, colocando el corte alrededor del yute e insertarlo en un molde para ser prensado manualmente en forma individual (no se hace por par) con uso de su fuerza física. Debía realizar una tarea diaria de 67 docenas de alpargatas, lo que hace un total de 804 unidades, es decir mi mandante debía realizar miles de movimientos repetitivos (al prensar) con sus manos y hombros por jornada laboral. Seguidamente extraía una por una las alpargatas las que eran acomodadas en un carro para que continúe la cadena de producción. Su postura columnaria era completamente viciosa por cuanto debía inclinar su cuello hacia adelante con los brazos suspendidos haciendo fuerza al tprensar, durante gran parte de la jornada laboral, lo que generaba mucha presión en sus miembros inferiores, superiores, cervicales y desgaste físico general.

En dicho sector existía una contaminación sonora muy elevada, a lo que se sumaba la descomunal vibración que emergían de maquinarias antiguas. También la contaminación del medioambiente interior a causa del humo, polvillo y fibras de la alpargata de Yute (que se encontraban en el aire) no solo reducían la visibilidad, sino que principalmente producían depósitos molestos en los ojos, oídos y fosas nasales. El ambiente de trabajo en dicho sector era sumamente nocivo ya que la ventilación dentro del mismo era insatisfactoria, a lo que se suma que la empresa jamás le proporcionó protectores auditivos ni visuales.

Seguidamente es trasladado al sector **ARMADO Y CEMENTADO**, desempeñándose como **"marcador"** de calzados NIKE y TOPPER, hasta aproximadamente el año 2000. Cumplía funciones de parado durante toda la jornada de trabajo como maquinista en una maquinaria que funcionaba con aire comprimido a los efectos de presionar el calzado para que el mismo se encuentre en su nivel y así poder realizar sus labores. Marcaba con un lápiz alrededor del corte del calzado y de allí

³ Violándose expresas disposiciones del art. 9 inc. b) de la Ley n° 19.587.

procedía a cementar. Para cumplir dichas funciones debía inclinar hacia adelante su cuerpo y torcer el cuello hacia un costado para poder observar bien sus manos que marcaban el corte, debido que frente suyo existía un caño (sostén del marcador) que era integrante de la máquina e impedía al actor observar de frente en línea recta, debiendo mantener dicha postura durante toda la jornada de trabajo; está demás decir que dicha posición era completamente anti-ergonómica ocasionándole fuertes dolores no solo en sus cervicales, sino también en sus hombros, piernas, y columna en general. La exigencia de producción diaria consistía en 600 pares. La empresa únicamente le proporcionó unos barbijos de tela y unos protectores auditivos duros que iban insertados a presión que le generaban una sensación de molestia constante y picazón, con la característica de que los mismos no menguaban en ruido intenso y vibración de las máquinas.

Por último es trasladado **"APARADO"** hasta su jubilación por invalidez absoluta el día 21/08/12 cumpliendo funciones como maquinista realizando **"ribetes, caña y talonera"**, cumpliendo sus tareas de sentado en máquina de Ribete de una aguja. Específicamente debía realizar las tareas utilizando sus manos y brazos colocando una cinta en el borde del calzado y lengua girándolo velozmente con sus manos para realizar las costura de la tela con el material, con una exigencia de productividad diaria de aproximadamente diez cajas de 48 pares cada una.

Luego fue encomendado a dar **"vuelta de corte"** cerrado la tela del calzado -que se encontraba a medio terminar- para su posterior inyectado. Las mismas eran estrictamente manuales, con sus dedos y manos daba vuelta el corte, completando 97 tareas de 48 pares por jornada. Mantenía posturas anti-ergonómicas (de parado), realizando movimientos continuos con posturas forzadas, haciendo un trabajo repetitivo a un ritmo excesivo.

Por último, daba vuelta del corte de tela, que a diferencia del anterior, se encontraba abierta en una etapa primaria de producción. Sus labores consistían en dar vuelta al corte de los calzados en sus extremos superiores para poder darle forma a la talonera, tareas que eran efectuadas a mano presionando la tela con los dedos con el mismo desgaste físico que el enunciado en el párrafo anterior. Por jornada laboral realizaba 27 tareas de 24 pares, funciones que realizaba sentado. La empresa le proporcionó un barbijo de tela y el mismo protector auditivo mencionado anteriormente.

Merece especial consideración los elementos vinculados al ambiente de trabajo que actuaron potenciando los vicios de los puestos que ocupó el actor, en éste sentido, la postura ut-supra referida le generaba fuertes dolores de rodillas, hombros, caderas y columnarios debido a la posición física que debía asumir durante toda la jornada, con movimientos continuos, repetitivos y a un ritmo excesivo; por otra parte la contaminación sonora continua del sector era muy elevada, ya que las máquinas que se encontraban en el sector eran muy ruidosas principalmente por sus engranajes, golpes y vibraciones ininterrumpidos que producían; las mismas se encontraban ubicadas una

alado de otras, estando próximas de las ojalilladoras que producían un ruido ensordecedor.-

En definitiva, los sectores que el actor se desempeñó se caracterizaban por la gran contaminación sonora, en el mismo funcionaban máquinas que producían unos ruidos ensordecedores. La contaminación era realmente elevada, cuyo motivo estaba dado por tratarse de maquinarias antiguas y ruidosas debido a sus engranajes, golpes y vibraciones ininterrumpidos que producían. Las años y duración están directamente relacionadas con la extensión del daño auditivo: a mayor tiempo de exposición, mayor profundidad de la sordera.

La posturas ut-supra referidas le generaron fuertes dolores de hombros, columna lumbosacra/cervical, piernas y rodillas debido a la posición física que debía asumir durante toda la jornada, con movimientos continuos, repetitivos y a un ritmo excesivo. Es decir, los trabajos repetitivos referidos se caracterizaron por la realización continuada de ciclos de trabajos similares; atento que cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y en las características espaciales del movimiento que derivaba en posturas antiergonómicas cervicales/lumbosacra por cuanto debía inclinarse hacia adelante para realizar sus labores, permaneciendo durante décadas de pie en una misma posición.

La carga de trabajo tanto estática como dinámica, junto con factores psíquicos y orgánicos del actor, además de un entorno no gratificante se sumaron en la formación de la fatiga muscular. Conforme la fatiga se fue convirtiendo más crónica y fueron apareciendo contracturas, dolor y finalmente la lesión. Así se formó un círculo vicioso de dolor que actualmente padece en la actualidad mi mandante como consecuencia de las labores realizadas en la fábrica.

La luminosidad tampoco era la adecuada, obligando a los operarios a esforzarse para fijar la vista de forma adecuada para no accidentarse. Estos elementos fueron coadyuvando con las posiciones viciosas, los extremos movimientos que en una repetición extenuante debían asumir para llegar a la producción ordenada, hicieron que el actor en la actualidad se encuentre incapacitado en forma total, absoluta y definitiva.

Es decir, ese vínculo con los elementos de trabajo (material) en las condiciones determinadas (máquinas y productividad) dadas por la empresa es la que le originaron las patologías que padece en la actualidad. A decir de Geretto⁴, *"cada entorno de trabajo queda definido por un cumulo de "cosas", como el conjunto de los elementos que conforman integralmente el entorno del puesto de trabajo, incluyendo los factores organizacionales, ambientales e instrumentales"*. En idéntico sentido la CSJN⁵, *"el agente dañoso no es el ambiente laboral en abstracto, sino las cosas propias de las que se sirve*

⁴ Geretto, Jorge, Ponencia presentada en las XI Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene del Trabajo de la ALASEHT, Santiago de Chile, octubre de 1997.

⁵ CSJN, 03/05/1984, "Vigilio, Hugo c/Tamet S.A."

el empleador para el desarrollo de la actividad y la forma con la que impone su utilización". Cuando estas tareas pudieran generar un resultado dañoso, deberían ser incorporadas al concepto de cosa riesgosas, de donde se deriva su inclusión en las previsiones del art. 1113 del Código Civil⁶.

III).b) DICTAMEN DE COMISION MÉDICA: JUBILACION:

Como lo vengo refiriendo el actor como consecuencia de las innumerables dolencias que venía padeciendo como consecuencia del trabajo que la demandada le ordenó ejecutar, ante la imposibilidad de seguir trabajando. En fecha **21/08/12** la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante la Comisión Médica N°: 001 de la Localidad de Tucumán, dictaminó:

-HIPERTENSION ARTERIAL ESTADIO II	30,00%
-FLEBOPATÍA ESTADIO III	14,00%
-LIMITACION DE HOMBRO DERECHO	4,48%
-HIPOACUSIA BILATERAL	3,65%
-LIMITACION FUNCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO	3,35%
-LIMITACION FUNCIONAL DE COLUMNA DORSO LUMBAR	2,23%
-DEPRESION NEUROTICA GRADO II	2,11%
	59,82%
Factores Complementarios:	
Edad:	4,49%
Educación:	4,49%
TOTAL:	68,80%

He de resaltar que la Comisión Médica solo hizo referencia al grado incapacitante, sin establecer causalidad con el trabajo, y merituando todas las patologías hasta llegar a la incapacidad necesaria para obtener el beneficio de jubilación por invalidez. Algunas de las patologías no tratadas tienen una incidencia directa con el trabajo que durante décadas realizó el actor para ALPARGATAS.

III).c) EXTINCION DEL VÍNCULO LABORAL:

Se desempeñó en la empresa hasta el 29.08.12, fecha en que la misma dio por extinguido el vínculo laboral mediante Telegrama Ley TCL 81297401, por encontrarse incapacitado en forma total y absoluta para seguir desarrollando las tareas que cumplimentaba en la empresa.

La extinción del vínculo laboral en los términos expuestos se fundamenta en el Dictamen de Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgo de

⁶ SCJBA, 29/09/2004, "Ferreyra, Gustavo Raúl c/Benito Roggio e Hijos y/o s/daños y Perjuicios; CSJN, fallos 308:248; "Arias Blanca Rosa c/Establecimientos Textil Oeste SAICYF"; CJN, Fallos, 311:1694, "Noriega Horacio Julio c/YPF".

Trabajo de fecha 21.08.12 que fijó un porcentaje de invalidez del 68,80% cuya copia se adjunta, lo que da cuenta que el grado de incapacidad que padece mi mandante es de carácter absoluto y definitivo, lo que desencadenó que la situación del actor quede encuadrada en las previsiones del Art. 212 4to párrafo de la LCT, determinando que la empresa mediante acuerdo de fecha 21.09.12, por medio de la Secretaría de Trabajo – Delegación Concepción- efectúe con mi mandante un acuerdo de pago comprensivo de la indemnización establecida en el Art. 245 LCT que en copias adjuntamos.-

III).d) INFORME MEDICO LABORAL DR. ZARIFE: INCAPACIDAD RECLAMADA

En fecha 20.12.12 el actor se presenta ante el **Dr. ROQUE HUMBERTO ZARIFE** –Clínica General MP 3292- MEDICO DEL TRABAJO M.N. 5359 a los efectos de determinar su Incapacidad Laboral.

En el mencionado Informe el galeno procede a realizar los exámenes médicos correspondientes, junto a métodos complementarios de diagnósticos y junto a los certificados médicos aportados por el paciente, concluye que **MERCADO RUBEN OSCAR**, se encuentra afectado de:

1) Incapacidad bilateral del nervio espinal con déficit sensitivo motor severo por compresión multiradicular en especial a nivel C3-C4 -C5 -C6 y C6-C7 con una incapacidad laboral del 7,5%.

2) Limitación funcional de columna cervical con una incapacidad laboral del 7,5%.

3) Lesión del nervio espinal a nivel de L4 –L5 –S1 con una incapacidad laboral del 7,5%

4) Limitación funcional de columna lumbosacra con una incapacidad laboral del 7,5%.

5) Limitación funcional de ambas rodillas por gonartrosis bilateral, con una incapacidad del 7,5%.

6) Hipoacusia neurosensorial bilateral con una incapacidad laboral del 7,5%.

7) Limitación funcional de ambos hombros, con una incapacidad laboral del 15%.

8) Várices en miembros inferiores, con una incapacidad laboral del 20%

9) Depresión neurótica grado II, con una incapacidad laboral del 7,5%.

Las patologías enumeradas guardarían una relación de causalidad con el trabajo realizado correspondiéndole una incapacidad laboral de más del 70% (setenta) en forma total, permanente y definitiva.-

III.e) CONCLUSIONES: ENFERMEDAD LABORAL

De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, la expresión «enfermedad profesional» designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.

En la Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), párrafo 6, 1), se contempla la definición de las enfermedades profesionales de la manera siguiente: «**Todo Miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como enfermedades profesionales las que se sabe provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones.**».

La definición de la enfermedad profesional contiene por tanto dos elementos principales:

- la relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo o actividad laboral específicos, y una enfermedad específica, y
- el hecho de que, dentro de un grupo de personas expuestas, la enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la población.

Mi mandante padece de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Dicho término según lo establece la Resolución 295/2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se refiere a los trastornos musculares crónicos, a los tendones y alteraciones en los nervios causados por los esfuerzos repetidos, los movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas, por estrés de contacto, posturas extremas, la vibración y/o temperaturas altas. Otros términos utilizados generalmente para designar a los trastornos musculoesqueléticos son los trastornos por trauma acumulativo, enfermedad por movimientos repetidos y daños por esfuerzos repetidos.

A lo largo de aproximadamente **treinta y ocho años** de trabajo, y como consecuencia de las características y/o modalidades de las labores desplegadas por mi mandante estuvo expuesta a agentes causantes de enfermedades profesionales. La actividad que realizaba durante toda su jornada laboral afectó su salud conforme fuera detallado en el Informe del Dr. Zarife, lo que generó secuelas permanentes, que limitan sus movimientos y posturas.

Las mismas son consecuencia directa de los movimientos y/o gestos forzosos repetitivos desplegados adoptando en forma permanente posiciones antiergonómicas, trabajando durante la mayor cantidad de años de **parado** en posturas rígidas, con sus cervicales inclinadas hacia adelante, en un ambiente de trabajo con

excesivo calor, implicando grandes esfuerzos en sus extremidades superiores; columna lumbosacra/cervical; caderas y rodillas.

Asimismo estuvo sometido a una intensa presión sonora en muchos casos notablemente superiores a los niveles admisibles conforme la ley 19.587 y su decreto reglamentario 351/1979, ya que gran parte de la maquinaria que existía y aún existe dentro de la empresa producían ruidos continuos como vibraciones que afectaron la audición de mi mandante, el que no tiene capacidad regeneradora, es decir, una vez lesionado se pierde audición de forma irremediable.

La elevada sonoridad ambiente prevenía del funcionamiento simultáneo de las maquinarias textiles, el que era tan elevado que los trabajadores se comunicaban entre sí a los gritos⁷.

En efecto, y no obstante que la demandada proveyó —en los últimos años— unos protectores que oficiaban de tapones auditivos, los mismos eran ineficaces para la función, el ruido ambiental terminó produciendo a mi mandante hipoacusia por trama acústico. Los protectores auditivos, no aislaban, sino que solo morigeraban mínimamente el intenso ruido reinante en el lugar, a lo que hay que agregar que los ruidos o sonidos muy intensos y prolongados durante muchos años se acompañan de lesiones al a su audición que afectaron seriamente la salud del actor provocando una incapacidad permanente y definitiva conforme lo detallado en el Informe Médico Laboral del Dr. Zarife.

Toda actividad productiva involucra una relación Hombre- Tarea- Ambiente, por lo tanto el hombre sometido a la acción directa o indirecta de la tarea, reacciona defensivamente, mediante mecanismos de adaptación, cuando el efecto producido en su organismo supera sus posibilidades anatómicas y fisiológicas (presencia de contaminantes), las defensas se ven superadas y se producen daños demostrables objetivamente.

Resulta evidente que las condiciones de trabajo eran insanas e inseguras existiendo un número muy amplio de **riesgos físicos**, como los ruidos, las vibraciones, la insuficiente iluminación, y temperaturas extremadas; **riesgos psicológicos** provocados por la tensión y la presión; y por último los riesgos que producen la no aplicación de los principios de la **ergonomía** por las posiciones columnarias asumidas por el actor durante décadas.-

⁷ CSJTuc. Sentencia n° 815 de fecha 17/09/2002. Juicio: S. E. B. Vs. A. S. N. S. SIDAÑOS Y PERJUICIOS: "Corresponde tener presente, que no resulta imprescindible a los efectos del juzgamiento de la responsabilidad de que se trata, la demostración precisa de la existencia de ruido por encima del nivel sonoro admisible por las reglas relativas a la seguridad industrial, desde que no es posible desestimar la eventual incidencia desfavorable que una intensidad sonora menor puede haber tenido en el menoscabo de la salud de quienes resultan expuestos (CS, 18/2/86 remitiéndose al dictamen del Procurador General de la Nación, "Córdoba, Esteban c. Massuh S.A." C. 841 L XIX); esto es así por cuanto la circunstancia de que la ley de higiene y seguridad industrial permita la exposición de los obreros a un determinado nivel de ruidos industriales, no significa sin más que sólo pueda atenderse su reclamación cuando este nivel sonoro resulta superado. No interesa tanto saber si se violó una norma de seguridad industrial, sino saber si el ambiente sonoro causó, o no, algún perjuicio al organismo del trabajador (conf.: LL, 1997-C, 458)".
DRES.: AREA MAIDANA - BRITO - GANDUR.

Por último, siendo el hombre una unidad sicosomática, las afecciones orgánicas repercuten en el equilibrio síquico. La persona que no oye, y padece innumerables dolores en sus miembros inferiores, superiores; columna y lumbares, desencadena inevitablemente una patología depresiva relacionada al trabajo, tal como sucede en autos.-

IV) CLASIFICACION DE LOS DAÑOS Y SU VALUACION:

Las enfermedades descriptas produjeron lesiones físicas y psicológicas en mi mandante, por lo que se reclama la reparación integral de todos los daños que dichas afecciones le producen.

La reparación integral de los daños que se reclaman tiene raigambre constitucional y surge de lo dispuesto por el artículo 19 de nuestra Carta Magna y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fuera expuesta en el caso "Santa Coloma, Luis y/o c/Ferrocarriles Argentinos" datado el 5/07/86.

Al respecto al CSJN se pronunció indicando que: *"La responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del CC sólo consagran el principio general establecido en el art. 19 de la CN que prohíbe a los "hombres perjudicar derechos de un tercero..."*

El alto tribunal de la Nación agrega. *"El principio de **alterum non laedere** entrañablemente, vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica..."* (Fernando Raúl Gunther c/Nación Argentina", Fallos 308:1118).

Para determinar los conceptos que deben comprender la reparación integral, debemos aplicar por analogía el artículo 2511 del Código Civil, que se refiere a la expropiación; y la doctrina que expuso la Corte Suprema en el caso "Provincia de Santa Fe c/Nicchi, Carlos Aurelio" citado en los autos "Aquino, Isacio c/Cargo de Servicio Industriales SA".

En ese caso, aplicable a estos autos, se ha señalada que *"...la indemnización se "justa" (art. 2511 del CC), tal exigencia tiene raíz en el art. 17 de la Constitución Nacional. Es "JUSTA" cuando restituye íntegramente al propietario el mismo valor económico de que se lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia de la expropiación..."*

A los fines de cuantificar el daño físico, el Superior Tribunal de la República, reiterando su posición (Fallos, 308:1109; 1115 y 1116) ha considerado que: *"...a criterio del Tribunal, para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las*

aptitudes físicas y psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidente de trabajo, aún que puedan ser útiles como pauta genérica de referencias, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que estas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y su vida de relación" (Fallos, 320:1361 y 325:1156) -CSJN, "Mosca, Hugo c/Pcia de Buenos Aires", 6-3-2007-

La Corte recientemente en el caso "Aróstegui" se abocó a la forma de establecer el monto de la indemnización, como también las tarifas que determina la ley de riesgos de trabajo.

En este orden de ideas, se consideró que: "...el a quo, so color de **restitutio in integrum**, estimó el resarcimiento por el daño material del derecho civil también mediante una tarifa. Más todavía; de una tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análogas en su esencia pues, al modo de lo que ocurre con ésta, solo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicio, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada "total obrera" y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectando hacia el resto de la vida laboral de aquella. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste. Al respecto, la Doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que "el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales", ya que no se trata "de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres ("Aquino" entre otros)...y agregó: "...se ha dejado de destacar que en el ámbito de trabajo incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance" cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos, 308:1109, 1117)..."

Con estas pautas, a los fines de cuantificar el monto, la edad promedio de vida que se debe tener alcanza a los setenta y cinco años. En efecto, se ha resuelto que "A los fines de la reparación integral cuando el trabajador acciona por el artículo 1113 del CC., la edad ad-quem debe tomarse en cuenta para cálculo de la indemnización correspondiente es de 75 años, pues no se trata de la edad base a la cual puede un trabajador acceder al débito social jubilatorio sino a la expectativa de vida útil que como se sabe en el país se ha elevado sustancialmente (CNAT, Sala VI, sent. 33.918 del 22/08/90, "Mamani Trinidad c/SADE Obrelmec").

Otro dato a tener en cuenta a los fines de cuantificar las indemnizaciones es el salario que percibe el trabajador, no para aplicarlo en una fórmula matemática, sino porque a menor salario, mayor deberá ser la indemnización para reparar el daño que padece.-

En efecto, se ha dicho que: "(...) las fórmulas basadas en salario son profundamente injustas. No sólo por los aspectos destacados en el precedente "Arodtegui" sobre el que volveré sino también porque quien menos gana necesita la utilización de su cuerpo para su vida cotidiana tanto en los aspectos laborales como en los de relación. Para graficar la idea quien gana \$1000 viaja en colectivo, pinta su casa, corta el pasto, etc. Quien gana \$20.000 viaja en auto, lo que conlleva mayor confort para soportar la discapacidad o el dolor y terceriza la mayor parte -si no todas de las tareas antes mencionadas" (Romualdi, Emilio E, "La reparación del daño a las personas en la

jurisprudencia de la Corte Suprema", Revista de Derecho Laboral y SS, Nº 10, mayo de 2008, págs. 868/871)".

Nuestra parte al cuantificar la demanda explicará las razones por la cuales aplica la fórmula dada en el precedente "Méndez", estableciéndose el porqué de utilizar la misma como "directriz" (como orientación)⁸ a los fines de llegar a una justa reparación integral y que abarcará -salvo daño moral- los perjuicios que a continuación se detallan:

IVa) INCAPACIDAD SOBREVINIENTE:

El daño físico cuando es permanente debe ser resarcido independientemente de los otros daños que padezca el actor.

Este criterio es el sustentado por la doctrina de la Máxima Magistratura de la Nación al considerar que: *"Respecto de las consecuencias dañosas, esta Corte ha considerado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 312:752,2412; 315:2834; 316:2774) (CSJN, "Mosca, Hugo c/Provincia de BsAs", 6-3-2007)."*

En el caso de marras, accionante padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva superior al 70% por las afecciones señaladas por el Informe Médico Laboral del Dr. Zarife. Aplicando este criterio y a los fines de cuantificar el daño físico, teniendo presente las lesiones que fueron descriptas, el grado de incapacidad que se denuncia, que el actor cuenta con 59 (cincuenta y nueve) años a la fecha.

El importe será cuantificado cuando la causa se encuentre radicada el Juzgado siguiendo la pauta orientativa del precedente "Méndez".

IV b) DAÑO MORAL

Corresponde además indemnizar a mi instituyente por el daño moral, atento a los sufrimientos angustias, estados depresivos que padece.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el Plenario Nº 243, dictaminado el 25/10/82, en los autos "Vieites; Eliseo c/Ford Motor Argentina SA, resolvió que: *"Es procedente el reclamo por daño moral en las acciones de derecho común por accidente de trabajo, fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el art. 1113 del Código Civil."*

Atento a que es procedente el presente rubro, corresponde establecer que el daño moral es un reclamo autónomo, y que consiste en reparar el

⁸ Quedando el criterio definitivo a la justa apreciación del Sentenciante.

sufrimiento, el dolor, el padecimiento que la lesión le causa al actor, y por lo tanto, no está relacionado con el daño físico, ni con el lucro cesante, u otro reclamo.

Lo expresado está fundado en la doctrina de la Corte Suprema que señaló: *"Que resulta procedente el reclamo de daño moral, detrimento que por su índole debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que se presume la lesión por la índole de la agresión padecida, la inevitable lesión de los sentimientos del demandante. A los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste."* (Fallos 316.2894, 321:1117, 325:1156; 326:820 y 847) (CSJN, "Mosca, Hugo c/Provincia de Buenos Aires", 6-3-07).-

Por lo tanto, ante lo señalado en los párrafos precedentes y la doctrina expuesta por la Máxima Magistratura de la Nación en el caso: "Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c/La Rioja, Provincia y/o s/Daños y Perjuicios" (27/05/03, T. 326. P.1673); en donde debido a un accidente, el actor sufrió la desfiguración de su rostro, y por dicha afección se valuó al daño moral con una cifra superior a los otros conceptos reclamados.

El importe será cuantificado cuando la causa se encuentre radicada en el Juzgado y se establecerá en un 20% del monto que surja de la aplicación de la fórmula "Méndez".

V) RESPONSABILIDAD DE LA EMPLEADORA:

Por los daños que padece mi mandante es responsable civilmente la empleadora ALPARGATAS SAIC, atento a las normas del Código Civil y en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, aplicable al caso.

Va) RESPONSABILIDAD OBJETIVA

El detrimento físico que sufre el actor es permanente y definitivo y se originó por las tareas antes descriptas, que desempeñaba en forma normal y habitual para la empleadora accionada.

En consecuencia, la empleadora deberá responder por el daño que causó la cosa en los términos del artículo 1113 del CC.

Nuestro Superior Tribunal en el precedente "Zelarayan vs. ALPARGATAS, resolvió⁹:

*"Es que hay que considerar que el trabajador debe realizar su actividad laboral con una cosa que es puesta por el empleador; no tiene autonomía para elegir dónde o con qué maquinarias o herramientas operar; pone su capacidad y fuerza laboral a disposición de su patrón el que lo manda a ejecutar la tarea con determinados elementos y condiciones, **siendo responsable porque estos brinden seguridad al***

⁹ CSJTuc. Sentencia n° 881 de fecha 18/10/2001. Juicio: ZELARAYAN ROBERTO MIGUEL Vs. ALPARGATAS CALZADO S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS

trabajador al ser quien se beneficia con ese uso de la cosa, y el que, en definitiva, realiza esas acciones a través de su subordinado.

Cabe destacar, por último, y a mayor abundamiento, que la atención al riesgo circunstancial subyace en muchas de las decisiones de la CSJN la que entiende que (en relación al art. 1113 CC), no cabe distinguir entre el daño producido "por y con las cosas" y el que se ocasiona "a propósito de las cosas". El criterio del máximo Tribunal del país fue seguido por otros Superiores Tribunales de Provincia. Así, la SCBA dijo el 15 de mayo de 1990, in re "Folmer, Valentín c. Firestone Argentina S.A.I.C.2 que: "Hay cosas que si bien no son en sí mismas riesgosas, pueden adquirir potencialidad dañosa independientemente de su calidad o aparente inofensividad, en razón de las peculiaridades de las tareas realizadas por el trabajador, el estado de salud de éste y la modalidad de su desempeño al exigirle esfuerzos físicos mediante constantes y repetidos movimientos de su cuerpo" (cfr. Aída Kemelmajer de Carlucci, "Reflexiones en torno a la acción de derecho común en la Nueva Ley de Accidentes de Trabajo y en el Código Unico", ED146- 637).

Siguiendo el análisis doctrinal dado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán y a los fines de precisar el alcance que se da a los términos "...riesgos y vicio de la cosa", la doctrina Nacional señaló:

"...que la cosa es riesgosa, cuando la misma presupone la eventualidad posible de que llegue a causar un daño, pues: "...no existe una cosa peligrosa en función de su naturaleza, sino de las circunstancias..." (Cfr Llámbias. T. de Derecho Civil T. IV-A, pág. 629).

Asimismo, la CSJN resolvió: *"el agente dañoso no es el ambiente laboral en abstracto sino las cosas propias de las que se sirve el empleador para el desarrollo de la actividad y del modo que impone de utilizar esas cosas, mencionándola expresamente (CS, mayo 3-984, Vigilio, Hugo c/Tamet SA)".-*

La Máxima Magistratura de nuestro país, ratificó este criterio de interpretar en forma amplia el artículo 1113 del CC al resolver que: *"Es descalificable el pronunciamiento que no hizo lugar a la indemnización reclamada por entender que el perjuicio se produjo no "con las cosas" ni por su riesgo o vicio sino "a propósito" de las mismas, lo que importa introducir una distinción que excede los límites de una interpretación razonable del art. 1113 del Código Civil y que desnaturaliza su significado, ya que no se trata de que el trabajo no sea una "cosa" sino establecer se las "cosas que debió manipular el dependiente para llevarlo a cabo eran o no de naturaleza riesgosa y, en tal caso meritar la eventual incidencia que las mismas hayan podido tener relación a los esfuerzos que -por aquellas características- pudieron haber requerido del obrero ("Blanca Rosa Arias c/Establecimiento Textil Oeste SAICyF", Fallos, 308.248).*

Coincidente con esta posición se falló expresando que *"al aplicar el artículo 1113 del CC en las demandas originadas por daños que se pretende que han surgido de la relación laboral, no puede dejar de considerarse la eventual incidencia que en relación a las cosas que debió manipular el trabajador, pudieron tener las posturas que debió adoptar en su labor o los esfuerzos que pudieron haber requerido de él". "No es admisible distinguir, a los efectos de determinar el derecho que pueda asistir al trabajador, si el daño fue producido por las cosas o en ocasión de de realizar tareas con ellas propias de la actividad, pues ello implicaría un apartamiento del concepto jurídico que cabe asignar a aquel vocablo en el contexto del art. 1113 del CC. El daño en cuestión no puede dejar de asociarse con las tareas que cumplió el trabajador, si es propio de ellas; su pretensión no puede desecharse sin el debido análisis de las labores desarrolladas y de las circunstancias en que se cumplieron"* (CSJN, Fallos, 311.1694, "Horacio Julio Nobriega c/YPF").-

Nuevamente la Excma. Corte de Tucumán nos brinda una clara posición doctrinaria de interpretación de la norma en cuestión:

"El carácter de "peligrosa o riesgosa" de la cosa no está necesariamente ligado a su indebido funcionamiento o mantenimiento, toda vez que la misma puede generar un riesgo sin haber mediado nada irregular, por lo que no cabe exigir la prueba del funcionamiento anormal de la cosa respecto del accidente (SCBA, LL, 1993-E, 579). En efecto, de la interpretación del texto legal del art. 1113 CC se deduce que lo relevante es determinar si hubo intervención activa de una cosa con un peligro o defecto; es decir, que su riesgo o vicio incidió causalmente en el resultado daños. El examen de la causalidad es puramente objetivo (enlace material entre un antecedente y su resultado), y por ende, ajeno a toda valoración sobre la injusticia y sobre la reprochabilidad de la causación del daño (cfr. Zavala de González, M., "Accidentes y Causalidad en Rev. de Derecho Privado y Comunitario n° 15, pág. 37 y sgtes.). Ello así, la responsabilidad está subordinada a la constatación de causalidad adecuada entre la fuente del peligro y los daños resultantes. De lo expuesto se sigue que la acción resarcitoria fundada en el riesgo de la cosa exige a los jueces de mérito valorar las circunstancias en que se produjo el evento; pues el peligro no sólo puede provenir de la naturaleza de la cosa, sino también de su utilización o empleo, o de la ubicación en la que se encontraba en el caso particular. Ello hace necesario un análisis de los antecedentes anteriores y concomitantes con la producción del evento, y de las circunstancias en que el mismo tuvo lugar, a fin de valorar la peligrosidad de las cosas involucradas, esto es, la aptitud para crear la probabilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa"¹⁰.

Con fundamento en las doctrinas transcritas y conforme surgirá de las probanzas de autos, se deberá responsabilizar a la empleadora en los términos del art. 1113 del Cód. Civil, por la incapacidad que padece el actor.

Vb) RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

Asimismo, la empleadora también es responsable del daño que padece la parte actora por su conducta negligente.

En efecto la empresa ALPARGATAS no cumplió con las medidas protectorias y preventivas que resguardan la integridad física del trabajador, infringiendo la ley de Seguridad e Higiene Ley 19.587 y su decreto reglamentario 351/79, modificado por el decreto 1338/96 , y resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo de la Nación, y el art. 75 inc. 1º de la LCT.

La empleadora no protegió a su dependiente, no solo por no haberle entregado los elementos seguridad, atento lo ordenado por los arts. 188 a 203, decreto 351/79, sino que lo expuso durante su vida laboral al manejo de máquinas que lo obligaron a realizar esfuerzos y asumir nocivas posiciones posturales que en forma directa le originaron las patologías que padece en la actualidad. Reitero, la circunstancia de haber expuesto al actor a trabajos que año a año fueron deteriorando su salud psicofísica sin tomar las prevenciones necesarias a los fines de evitarlo, la convierte en civilmente responsable por sus consecuencias.

Asimismo no realizó la totalidad de los exámenes médicos periódicos durante la vigencia del vínculo laboral, como lo establece la ley 19.587 y la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo N° 43/97, , teniendo presente

¹⁰ CSJTuc.Sentencia n° 815 de fecha 17/09/2002. Juicio:S. E. B. Vs. A. S. N. S. S/DAÑOS Y PERJUICIOS

que la actividad que desempeña y las tareas que realizaba su dependiente y el ámbito donde debía efectuarse, originaron durante décadas a cientos de trabajadores patologías similares a las que padece el actor en la actualidad, muchas de ellas se encuentran en el listado del decreto 658/96, ratificatorio del laudo 156/96.

Estas omisiones culposas, de quien debió obrar con prudencia cumpliendo con las normas señaladas, la obliga a responder por el daño que ocasionó en los términos de los artículos 512, 519, 520, 902 a 904, 1067 a 1069, 1074 y 1109 del Código civil.

En definitiva, la empleadora es responsable de conformidad con lo dispuesto por el art. 1109 del CC si la enfermedad accidente se produjo porque aquella no cumplió con lo dispuesto por los arts. 103, 106, 107 y 200 del dcto. 351/79 (reglamentario de la ley 19.587 de higiene y seguridad del trabajo) que expresamente imponen la obligación de proveer la protección adecuada para evitarlo. La obligación que incumbe al empleador de resguardar la vida o integridad física del trabajador es estrictamente legal y precisamente la violación de estos constituye el sustrato de la responsabilidad extracontractual en los términos del art. 1109 del Código Civil.

VI) INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 39 DE LA LEY 24.557

Que atento a los términos en que se ha entablado la presente acción, vengo a plantear la inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo primero de la Ley 24.557 conforme a las razones jurídicas que se exponen a continuación.

Fundaré la solicitud del pedido de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo en la doctrina de la CSJN recaída en los autos: "**Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA**" (21/09/2004).

Sus considerandos:

1. *El valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos, pues tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia.*

2. *No debe medirse en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres.*

3. *La incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable.*

4. *Los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que, no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral, sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio.*

5. *La LRT, mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, y la consiguiente eximición de responsabilidad del empleador de su art. 39, inc. 1, sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que, asimismo, evalúa menguadamente.*

6. Mediante la eximición de la responsabilidad civil del empleador frente al daño sufrido por el trabajador, la LRT no ha tendido a la realización de la justicia social, sino ha marchado en sentido opuesto al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo y, en consecuencia, formular una "preferencia legal" inválida por contraria a la justicia social.

7. Es justo y razonable que la legislación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equilibradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance.

8. Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad.

9. Corresponde confirmar la sentencia apelada, ya que, el art. 39, inc. 1, de la LRT es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla.

10. El principio del alterum non laedere configura una regla constitucional de vasto alcance, que esta Corte juzgó entrañablemente ligada a la idea de reparación de los daños causados y que, si bien constituye la base de la reglamentación que hace el Cód. Civ. en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes, no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. (Del voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

11. La LRT, al vedar la promoción de toda acción judicial tendiente a poder demostrar la real existencia y dimensión de los daños sufridos por el trabajador y disponer, además, la exención de responsabilidad civil para el empleador, cercena de manera inconciliable con los principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegra. Esa restricción conceptual importa la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños sufridos a la integridad psicofísica del trabajador, pues la ley cuestionada no admite indemnización por otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta mensurada de manera restringida. (Del voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

12. La exención de responsabilidad del empleador frente a infortunios laborales, se presenta como una vía apta para eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de preservar el estado de seguridad, higiene y dignidad del trabajo, ya que mediante la simple contratación de un seguro legal se podrá lograr la impunidad ante la culpa o desaprensión que pudieren causar un daño. (Del voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

13. El art. 39, inc. 1, de la Ley N° 24.557 afecta las garantías constitucionales reconocidas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y de los tratados incorporados por el art. 75 inc. 22, de modo que se encuentran reunidas las condiciones que exigen declarar la invalidez de la norma, como ultima ratio del orden jurídico. (Del voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

Los transcriptos considerandos ratificados reiteradamente por la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación y seguidos por los tribunales Nacionales y Provinciales me eximen de realizar adicionales comentarios, pidiendo que los mismos sean considerados parte de la presente demanda y sustento del pedido de inconstitucionalidad formulado contra el art. 39 inc. 1 de la ley 24557.-

VII) RESPONSABILIDAD DE LA ART EN LOS TERMINOS DEL CODIGO CIVIL

Nuestra parte en el presente punto dará los fundamentos por los cuales LA CAJA ART es solidariamente responsable por los daños que padece el actor; si bien el extremo será motivo de un basto andamiaje probatorio, comenzaré este punto afirmando hechos que la Aseguradora conocía:

***) Ambientes laborales donde trabajó el actor que no cumplen con los mínimos estándar de higiene y seguridad:**

- Sectores con gran contaminación sonora.
- Existencia de polvillo en el ambiente.
- Existencia de sectores donde se trabaja con químicos altamente nocivos para la salud de los operarios.
- Sectores donde las altas temperaturas exceden los márgenes permitidos por la ley.
- Falta de adecuada luminosidad en relación a la tarea manual encomendada al actor.

***) Tareas perjudiciales para la salud del actor:**

- Realización de tareas donde asumió constantes posturas antiergonómicas.
- Exposición a esfuerzos repetitivos.
- Realización de funciones en contacto con agentes nocivos o expuestos a elevadas temperaturas.

***) Falta de entrega de elementos de prevención adecuados:**

- Períodos en que no se le entregó protectores auditivos.
- Períodos en que no se le entregó protectores respiratorios.
- Entrega de protectores auditivos insuficientes a la exposición de ruidos a las que estuvo expuesto.
- Entrega de protectores respiratorios insuficientes para prevenir las consecuencias de la sustancias a las que estuvo expuesto.

***) Falta de los controles médicos periódicos exigidos por la legislación: deficiencia de los realizados. Consecuencias:**

- Inexistencia de diagnósticos oportunos sobre los problemas físicos que el actor comenzó a padecer.
- Falta de seguimiento adecuado de las patologías que padeció el actor.
- Inexistencia de tratamientos de las patologías.
- Inexistencia de reubicación a puestos de trabajo acordes a las patologías que comenzaron a manifestarse en el actor.
- Agravamiento de los cuadros patológicos que llegaron a los grados incapacitantes que padece en la actualidad.

***) Existencia de cuadros patológicos generalizados:**

Conforme se acreditará en autos, existe un alto porcentaje de operarios que trabajaron en ALPARGATAS en puestos similares a los que laboró el actor y en períodos parecidos, que padecen:

- Hipoacusia bilateral.

- Severas patologías columnarias.
- Problemas visuales.
- Várices.
- Problemas respiratorios.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Etc.

Lo expresado en este punto no es un dato menor; en autos se acreditará como las tareas encomendadas al actor -y a cientos de operarios- causaron en un porcentaje elevado de ellos similares cuadros patológicos; circunstancia que nos ubica ante actividades "causantes" de las mismas enfermedades.

Conclusión: es evidente que el proceso productivo de ALPARGATAS, entendiendo el mismo no solo en relación a las tareas específicas que se le encomendó ejecutar por varias décadas, sino su exposición al ambiente donde las llevaba a cabo, sumado a la inexistencia o deficiente examen médico anual, originó que mi mandante -como cientos de operarios- padezca las patologías cuya indemnización se reclama en autos; la A.R.T. "conocía" dichos incumplimientos, debiendo responder por ello.

Nuevamente he de apoyarme en la doctrina de la Excma. Corte para fundar jurídicamente la responsabilidad solidaria que reclamo en autos; el Superior Tribunal de la Nación en autos "**Torrillo**"¹¹, resolvió como doctrina firme y definitiva, **la posibilidad de condenar civilmente a la ART respecto de los daños laborales, siempre "que se demuestre que exista un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o cumplimiento deficiente" por parte de la ART de sus deberes legales** (considerando 8 del voto de la mayoría).

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán en autos "**Juárez vs. Carranza**"¹², resolvió siguiendo la doctrina "Torrillo".

Al analizarse el precedente de la Excma. Corte de la Nación, los primeros considerandos del voto de la mayoría hacen especial hincapié en el aspecto preventivo del régimen de accidentes del trabajo al señalar:

"Que, por cierto, la índole primaria, sustancial o primordial dada a la faz preventiva en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, se impone fundamentalmente por su indudable connaturalidad con el principio protectorio enunciado en el art.14 bis de la Constitución Nacional ("El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes"), el cual, además dispone que estas últimas deberán asegurar al trabajador 'condiciones dignas y equitativas de labor'. Súmase a ello, todo lo proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para el cual uno de los más antiguos aspectos de sus estándares internacionales en el campo laboral fue el de asegurar que las condiciones de trabajo resultasen, a la vez, seguras y saludables" (considerando 4, voto mayoría).

¹¹CSJN, 31/03/2009, "Torrillo Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro"

¹² CSJTuc. sent. n° 590 de fecha 17/12/09. Autos: "Juárez Graciela Carmen vs. Carranza Cirilo s/ Indemnización por fallecimiento del trabajador".

Continúan:

"uno de los pilares fundamentales" de una estrategia de salud y seguridad en el trabajo consiste en la atribución "de la máxima prioridad al principio de prevención", "para la protección de la integridad psicofísica del trabajador, cuando no de la vida misma de este, atento su carácter de sujeto de preferente tutela constitucional" (considerando 4, voto mayoría).

Así, la citada ley impuso a las ART la obligación de **"adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo"** (art. 4.1); **incorporar en los contratos que celebren con los empleadores "un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que [aquellos] deban adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente"** (art. 4.2), así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento de este de las normas de higiene y seguridad (art. 31.1.a) a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4). Súmase a ello, además de promover la prevención mediante la información a dicha Superintendencia acerca de los planes y programas exigidos a las empresas (art. 31.1.c), el asesoramiento que deben brindar a los empleadores **'en materia de prevención de riesgos'** (art. 31.2.a)" (considerando 5 del voto de la mayoría).

También se señala en el fallo que:

"La LRT, para alcanzar el objetivo que entendió prioritario, la prevención de riesgos laborales, introdujo, e impuso, un nuevo sujeto: las ART. En este dato, y no en otro, finca la diferencia esencial que, para lo que interesa, separa a la LRT del régimen anterior, juzgado insatisfactorio. (. . .) De ahí, que las ART hayan sido destinadas a guardar y mantener un nexo 'cercano' y 'permanente' con el particular ámbito laboral al que quedaran vinculadas con motivo del contrato oneroso que celebrasen. De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa" (considerando 6 del voto de la mayoría).

Señala el fallo que, dada esta normativa, la condición de las ART de entidades de derecho privado no les permite eludir sus responsabilidades ya que son **"destacados sujetos coadyudantes para la realización plena" de los objetivos de prevención de los infortunios, que tienen raigambre constitucional y sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con jerarquía supralegal** (considerando 7 del voto de la mayoría).

Según la Corte el tema en discusión tiene proyección sobre tres planos: a) **Sobre los derechos individuales de cada trabajador a la integridad psicofísica, a la salud y a la vida** (considerando 7, 2º párr.). **"... la protección de la integridad psicofísica del trabajador, cuando no de la vida misma de este, mediante la prevención en materia de riesgos laborales resulta, sin dudas, una cuestión en la que alcanza su mayor significación y gravedad la doctrina de esta Corte, según la cual, aquel es un sujeto de preferente tutela constitucional ("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3689 y 3690, y "Aquino", Fallos: 327:3753, 3770 y 3797)"** (considerando 4, último párr.). b) En el plano social por cuanto **la salud "se erige como un verdadero bien público"**; (considerando 7, 3º párr.). c) En el plano internacional, **toda vez que la ratificación de los tratados internacionales asumidos por el Estado argentino profusamente citados en fallo, determina que la "labor de las ART constituye una labor de alto peso para que aquel satisfaga fielmente los aludidos compromisos y no incurra en responsabilidad internacional** (considerando 7º, 4º párrafo).

El fallo tiene su resolución final en el considerando 8 del voto de la mayoría que señala **"Que, en suma, no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquel, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que**

la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a estas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que estos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas".

Como se puede observar el fallo sigue la tesis de la causalidad adecuada: en esta tesis se parte de la idea de que el fenómeno causal debe ser analizado de acuerdo a las reglas del comportamiento regular y de acuerdo a la experiencia diaria. El análisis del caso debe ser hecho ex post facto de acuerdo a un cálculo de probabilidades y las reglas de la previsibilidad objetivas.

La demandada solidaria responde por un lado, conforme el deber de prevención de los riesgos que comparte con la empleadora y por el otro la obligación de denunciar al ente regulador los incumplimientos de su asegurada.

Es decir, al no acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales previstas por la LRT, la ART queda incurso en responsabilidad frente a las afecciones incapacitantes padecidas por el damnificado, es decir, incurre en conducta culposa, consistente en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiese a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (doctrina del art. 512 del CCiv.) por lo que debe responder por el daño ocasionado (art. 1074, CCiv.) en los términos de los arts. 1066, 1068 y 1081 del Cód. Civil.

Reitero, a las ART se le han impuesto deberes muy precisos y concretos, los ya reiteradamente señalados, de los arts. 4, 31 de la LRT y el Decreto 170/96, cuyo incumplimiento, que no evita los daños previsibles, tiene que forzosamente dar lugar a responsabilidades de orden civil, más allá de las sanciones de naturaleza administrativa o penal.

Por otra parte no puede tampoco dejarse de contemplar que las aseguradoras desarrollan una actividad comercial y están cobrando una alícuota que incluye brindar asesoramiento, capacitar al personal, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y realizar los exámenes periódicos, entre otras obligaciones.

Asimismo cabe recordar que la LRT adoptó la política legislativa de que el Estado controla el funcionamiento de las ART a través de la SRT, mientras que aquellas deben controlar a cada una de sus aseguradoras, denunciando al ente regulador los incumplimientos de éstas.

En definitiva, los antecedentes en que sustentamos la presente acción demostrarán que existió un **nexo de causalidad adecuada entre el daño sufrido**

por el actor y las conductas omisivas de la aseguradora respecto a sus deberes legales de contralor de ALPARGATAS. No se trata de que cualquier enfermedad accidente determine la responsabilidad civil de la ART, sino que en autos existe ese vínculo causal adecuado que significa que si se hubiera cumplido con la obligación legal de contralor se hubiera evitado la exposición del actor a las tareas que le causaron las patologías o se hubiesen disminuido sus consecuencias. Para ello y siguiendo la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires¹³, propongo como método de acción "***hacer -ex post facto- un cálculo de probabilidad, preguntándose si la acción u omisión de la ART es por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso ordinario de las cosas. De tal modo que la respuesta afirmativa determinaría que la omisión sería adecuada para producir el daño, derivándose de la misma la imputabilidad civil de la aseguradora***". En otros términos, advertido o debido advertir por parte de la ART el trabajo que realizaba el actor, el ambiente donde se desarrollaba el mismo, la falta de seguimiento adecuado de las patologías, la existencia de operarios que padecen de forma endémica las mismas patologías: ¿no debía denunciar a la empleadora? ¿no debía proponer planes de mejoramiento?. Acreditaremos que si hubiese actuado previniendo y/o denunciando en su caso, nuestro mandante no padecería la incapacidad cuya reparación se reclama en autos. SE TENGA PRESENTE

VIII) RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA EN LOS TERMINOS DE LA LRT:

VIII a) RESPONSABILIDAD DE LA CAJA ART SA

En forma independiente al reclamo analizado precedentemente, donde el basamento de la solidaridad está dado por el incumplimiento por parte de la A.R.T. de su deber de prevención y denuncia de los incumplimientos relativos a las normas de higiene y seguridad que a la postre "causaron" las patologías que padece el actor en la actualidad (art. 1074 C.C.), por el presente en forma subsidiaria solicitamos que la CAJA ART SA responda en los términos de la Ley de Riesgos de Trabajo.

El sistema de acumulación de ambos sistemas está consagrado por la doctrina de la Excma. Corte en autos "Aquino"¹⁴ y "LLosco"¹⁵.

En LLosco se estableció:

1. El hecho de que el trabajador haya cobrado la indemnización por parte de la aseguradora de riesgos de trabajo, no excluye su habilidad para invocar el derecho del que se considere titular y plantear la invalidez constitucional de las normas que se le opongan -respecto de la empleadora y por la parte de la indemnización que, según su postura, queda insatisfecha por la mentada exención-

2. Corresponde revocar la sentencia que rechazó el recurso de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1° de la LRT, desestimando la demanda con

¹³ Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 9 de mayo de 2007, Causa L. 83.118, "S. V., J. contra 'Incido SRL'. Accidente

¹⁴ CSJNac. Autos "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/Accidentes Ley N° 9688" de fecha 21-09-2004

¹⁵ CSJNac. Juicio: LLosco, Raúl c/Irmi S.A. s/Recurso de Queja de fecha 12-06-2007

fundamento en el derecho civil contra la empleadora del accionante, al considerar que el actor abdicó de su derecho a formular el reproche de inconstitucionalidad, dado su acatamiento voluntario de la vía procesal regulada por la ley citada.

Es decir "La víctima de un accidente de trabajo puede percibir de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo la indemnización tarifada del sistema de la LRT, sin que ello implique la renuncia a reclamar al empleador la reparación civil, no contemplada en la tarifa, planteando la inconstitucionalidad del art. 39 párrafo primero de la LRT"¹⁶.

En el sentido apuntado en pago recibido deberá ser considerado a cuenta; el art. 260 de la LCT establece:

"El pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones laborales efectuado por un empleador será considerado como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas, y quedará expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de la diferencia que correspondiere, por todo el tiempo de la prescripción".

Como se refiriera, el precedente "Llosco" ha aclarado definitivamente la relación existente entre la acción fundada en el derecho civil, encaminada a obtener la reparación integral, y la acción sistemática dirigida a percibir prestaciones dinerarias de la LRT. En éste sentido, ha quedado definitivamente consagrado el modelo de acumulación entre ambas acciones¹⁷.

La acumulación en la misma acción el reclamo dirigido contra el empleador y la dirigida contra la ART para la percepción de las llamadas prestaciones dinerarias de la ley, se encuentra expresamente aceptado en las doctrinas de la Excma. Corte Suprema de la Nación (autos "Castill", "Venialgo" y Marchetti)¹⁸; ante ello resulta lícito y conforme a derecho el presente reclamo subsidiario.

En definitiva, al momento de dictarse sentencia y para el supuesto que la A.R.T. sea condenada en base a las responsabilidades asumidas contractualmente, deberá descontarse dicho resarcimiento a la reparación integral (que contempla: el daño moral, psíquico o daño biológico, afectación al proyecto de vida, etc). Reitero, se deberá descontar de la indemnización integral (en el supuesto de no existir la solidaridad fundada e el art. 1074 del C.C.) las indemnizaciones tarifadas emergentes de la incapacidad permanente definitiva abonada por la ART, que se refieran a una porción del lucro cesante por el menoscabo parcial de la pérdida de ingresos futuros en relación al empleo en el que ocurrió el infortunio. Decimos que es parcial, porque solo toma en cuenta el ingreso de ese empleo, no computa la totalidad de los ingresos sino

¹⁶ Horacio Schick; RIESGOS DEL TRABAJO, Tomo I, Cuarta Edición Actualizada, Pag. 75- Ed. David Grimberg - Libros Jurídicos

¹⁷ Horacio Schick; RIESGOS DEL TRABAJO, Tomo I, Cuarta Edición Actualizada, Pag. 82- Ed. David Grimberg - Libros Jurídicos

¹⁸ Horacio Schick; RIESGOS DEL TRABAJO, Tomo I, Cuarta Edición Actualizada, Pag. 83- Ed. David Grimberg - Libros Jurídicos

exclusivamente aquellos que están sujetos a aportes (art. 12 LRT) y solo tiene en cuenta la edad jubilatoria de 65 años cuando la expectativa de vida cuanto menos llega a los 75.

VIII b) INCONSTITUCIONALIDAD del ART. 6º 2do párrafo LRT

Lo manifestado en el punto **VIIIa)** nos lleva a solicitar, también en forma subsidiaria, se declare la inconstitucionalidad del artículo 6º, párrafo 2º de la LRT que determina la existencia del listado cerrado de enfermedades que impide la reparación de incapacidades laborales respecto de afecciones no incluidas en la lista que debe elaborar y/o revisar el Ejecutivo, de acuerdo con lo previsto por el art. 6.2 de la LRT.

Reitero lo establecido en el párrafo precedente en sentido de que el reclamo principal y la solidaridad que contempla el mismo se basa en el derecho civil, ante ello y siguiendo la doctrina sentada en "Silva"¹⁹: ***"Si se demuestra que una enfermedad laboral está vinculada causalmente a un hecho antijurídico - configurándose la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil- la acción procede con independencia del listado que prevea la Ley de Riesgos del Trabajo, el cual obedece a un régimen especial diferente del derecho común.*** Por ende, si se hiciera lugar a la acción integral fundada en el derecho común: ***"Resulta inoficioso en el caso ingresar al examen de la constitucionalidad del art. 6º, inc. 2º de la Ley de Riesgos del Trabajo en tanto se persigue la reparación de una enfermedad que no está comprendida en el listado que debe elaborar y revisar el Poder Ejecutivo, dentro de dicho sistema especial*** (del considerando 2). Se tenga presente.

Realizadas las aclaraciones precedentes prosigo con el planteo:

El listado de enfermedades profesionales confeccionado por el Poder Ejecutivo es cerrado; ello significa que aún demostrando acabadamente la vinculación causal entre la mecánica laborativa y una afección incapacitante, si esa dolencia no está enumerada taxativamente en el listado no es resarcible, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento previsto por el Decreto 1278/00, que como veremos infra, nada modifica al respecto.

Puede adelantarse que este listado taxativo y cerrado es inconstitucional simplemente con afirmar que una dolencia es incapacitante y resarcible cuando el Poder Ejecutivo dogmáticamente dice que lo es. Esto colisiona con el art. 19 de la Constitución Nacional al violar el principio de no dañar, y lesiona la justicia conmutativa, ya que quien persigue su propio interés y daña el derecho de otro debe indemnizarlo. El empleador al organizar la empresa para la producción de bienes y servicios crea una situación de riesgo para los trabajadores y terceros, y por ende, debe resarcir el daño que

¹⁹ CSJNac. Causa Silva, Facundo J. c/Unilever de Argentina S.A. de fecha: 18-12-2007.

puede producirse aún cumpliendo con las normas de higiene y seguridad, para ello contrata una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para hacer frente tal eventualidad.

Resulta asimismo menoscabado el art. 14 bis de la Constitución Nacional, ya que no puede siquiera discutirse si un accidente laboral o una enfermedad que es producida por el trabajo puede o no estar amparado por una protección especial. La pretensión de que se cubra el daño causado al trabajador únicamente mediante los beneficios de obra social y seguridad social, como si se tratara de padecimientos ajenos al ámbito laboral, configura una deficiente comprensión del texto constitucional.

También ataca al art. 19 de la Ley Fundamental, que consagra el principio *alterum non laedere*, por el cual todo el que ejecute un acto del cual se derive un daño a otro está obligado a repararlo. Evidentemente queda conculcado al no reconocer derecho a reparación alguna al trabajador cuando el accidente no reúna las características de la definición legal o cuando las enfermedades no estén en el listado oficial. El trabajador queda relegado así a una subespecie de persona que no tiene la garantía constitucional de no ser dañada.

En el referido precedente "Silva" se estableció:

"Ahora bien, otro de los cuestionamientos esbozados por la asegurado-ra, es que la dolencia cardíaca que presenta el actor, no se encuentra incluida en el listado previsto por el art. 6 de la LRT, pero considero que no le asiste razón, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Silva, Facundo c/Unilever Argentina S.A.", sentencia del 18/12/07 (S1789 XL) sostuvo que: "No parecen quedar dudas que la LRT de 1995, es incompatible con el orden constitucional y suprallegal enunciado, puesto que ha negado todo tipo de reparación al trabajador víctima de una enfermedad que guarda relación de causalidad adecuada con el trabajo, por el solo hecho de que aquélla no resulta calificada de enfermedad profesional en los términos de dicha norma. Por cierto que esa incompatibilidad encuentra fundamento, además de lo expresado en los considerandos precedentes, en otros derechos de jerarquía constitucional que, en consecuencia, fueron desoídos por el legislador. En primer lugar, el de toda persona "a que se respete su integridad física, psíquica y moral", tal como lo enuncia el inc. 1º del art. 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, con toda especificidad y autonomía (asimismo: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I)".

"El descarte de la responsabilidad del empleador que consagra la LRT en el punto sub lite, constituye en sí mismo un elemento distorsionante de la relación laboral, un claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no a su desamparo. Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general como en lo que concierne a las propias de cada actividad. (Del voto de los ministros Fayt y Petracchi)."

Y atendiendo a que ha quedado acreditado el nexo causal o la influencia de las tareas cumplidas por el Sr. Antuñez en relación a su dolencia cardiovascular (en la medida ya referida al considerar el agravio pertinente vertido por la demandada empleadora), es que me inclino por declarar la inconstitucionalidad del precitado art. 6 de la LRT y proponer, de compartirse mi moción, modificar la sentencia recurrida y hacer extensiva la condena solidaria a la CNA ART S.A., aunque ciñéndola a los límites de la póliza, tal como además lo solicita expre-samente la parte actora en su memorial de agravios (v. 2º párrafo de fs. 651)

En virtud de lo expuesto se petitiona al Tribunal declare la inconstitucionalidad de la normativa referida supra, y determine a la luz de la prueba a rendirse en autos si las dolencias padecidas por el suscripto revisten el carácter de enfermedades profesionales, y en tal caso, ordene su resarcimiento.

En consecuencia, solicito también a VS que **LA CAJA ART SA** responda por las prestaciones que establece la ley 24.557.

Para el cálculo de las mismas se toma en consideración que el monto de la prestación dineraria está determinada en primer término por el valor mensual del ingreso base anterior a la primera manifestación invalidante que manteniendo valores constantes estará sujeto al cálculo de la pericia contable a realizarse en autos.

El importe será cuantificado cuando la causa se encuentre radicada en autos; el que deberá ser deducido del resarcimiento integral fundado en el derecho común.

VIII c) PRESTACIONES DINERARIAS INCONSTITUCIONALIDAD DEL INGRESO BASE Y SU CONGELAMIENTO A TRAVES DEL TIEMPO

Nuevamente: el presente planteo es subsidiario.

Atento a los hechos relatados, la demandada adeuda prestaciones dinerarias por Incapacidad total, permanente y definitiva.

En lo que respecta al cálculo de las prestaciones dinerarias de la LRT, en el caso de autos las mismas se han efectuado con fuertes pérdidas para el trabajador respecto a sus reales y totales ingresos con anterioridad al infortunio.

En efecto el llamado "ingreso base" utilizado como cómputo de todas las prestaciones dinerarias de la LRT se efectúa en base al llamado "salario previsional" que como dice el art. 12 de la LRT es el "que resulta de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jub. y Pensiones devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado". Por lo tanto, las prestaciones dinerarias se determinan en base a una cifra dineraria inferior a la real remuneración del trabajador.

En este punto cabe también destacar que el cálculo de las prestaciones sujetas al referido salario previsional le causa al trabajador otro nuevo perjuicio, pues los daños sufridos en las diferentes secuencias de su incapacidad son fijados sólo computando una parte de la remuneración.

El criterio de "salario previsional" del artículo 12 de la LRT no tiene en cuenta para calcular el VMIB aquellas prestaciones que forman parte del ingreso mensual del trabajador, pero que carecían en la ley de carácter remuneratorio o, al menos, se le había negado normativamente hasta ahora. Tales los casos –hasta la entrada en vigencia el 1-01-08 de la ley 26.341 que derogara los inc. b) y c) del art. 103 bis, LCT- de los vales de alimentos, de almuerzo, de transporte, etc. O más cercanas aun, aquellas asignaciones llamadas "alimentarias no remunerativas", utilizadas en las negociaciones colectivas.

Esta situación se ve agravada aún más en las épocas de inflación y aumento de salarios, ya que se produce un empobrecimiento de la víctima respecto al ingreso del trabajador sano y en actividad, ya que el VMIB queda cristalizado al cálculo de ingresos del año anterior a la primera manifestación invalidante, como ya fue dicho.

Por tal motivo este criterio irrazonable que afecta al trabajador justifica el derecho a percibir una reparación extra para cubrir la brecha respecto al daño no contemplado en las prestaciones dinerarias del sistema.

A su vez, los arts. 14 y 15 de la LRT determinan que la estimación de las prestaciones dinerarias de la Ley por Incapacidad Permanente y Definitiva parcial o total, se efectúan tomando el Valor Mensual del Ingreso Bse de acuerdo a la definición del art. 12 antes citada.

Esta regulación no prevé ninguna actualización o reajuste de dicho valor mensual, a pesar que entre la fijación de este coeficiente y la liquidación de la indemnización por la incapacidad permanente, puede transcurrir en lapso prolongado de tiempo, durante el cual es posible que se otorguen aumentos salariales u ocurran procesos inflacionarios tales como los que padecemos en la actualidad.

Por lo tanto calcular la indemnización definitiva sin contemplar los aumentos o actualización durante el período que abarca la primera manifestación invalidante y el momento de practicar la liquidación definitiva, produce como resultado la determinación de una indemnización tarifada, absolutamente desvirtuada en relación a los fines con que fue creada.

En este sentido vale traer a colación lo decidido en el referido Plenario N° 231 del 9/2/81: "Roldan c/Manufactura Algodonera Argentina SA" de la CNAT que determinó la necesaria actualización de los salarios computables para calcular las indemnizaciones por accidentes del trabajo, frente a procesos inflacionarios, circunstancia que se ha repetido nuevamente en nuestro país a partir de la última década, y que no ha sido contemplada tampoco para el pago de las indemnizaciones permanentes.

En consecuencia, las normas cuestionadas resultan inconstitucionales por cuanto se revelan como mezquinas e insuficientes a los fines de otorgar una reparación justa al damnificado respecto a los daños causados por un infortunio laboral.

Esta disminución injustificada de las indemnizaciones colisiona con los artículos 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitución Nacional.

En este sentido, dicha diferencia debería en primer lugar ser cubierta por el empleador. Si bien este último celebró un pacto que es aleatorio, pagando una suma insuficiente respecto al posible resarcimiento del daño ocurrido, también es cierto, ha suscripto un contrato de seguro que lo cubría parcialmente de los riesgos a los que estaba expuesto. Abonó una prima que, con respecto al hipotético daño causado, era parcial, por lo que debe asumir las consecuencias (Maza, Miguel L – Loustaunau Eduardo., “Desajuste en las prestaciones dinerarias de la LRT”, DT, 2008 (julio), 711; LL, 2008-E,914).

Cabe señalar que la jurisprudencia declaró inconstitucional el art. 12 de la LRT, “con relación a la concreta situación del accionante, al quedar desvirtuada la referencia de una prestación que la ley califica de seguridad social, por ausencia de relación adecuada de los haberes del trabajador activo con los ingresos reconocidos durante el lapso de incapacidad laboral temporaria, supuesto en el cual las prestaciones dinerarias de la LRT se revelan como claramente insuficientes para generar una adecuada reparación de los detrimentos económicos ocasionados al trabajador, provocando asimismo una diferencia (por disminución) irrita e injustificada frente a otros supuestos análogos de imposibilidad temporaria de cumplimiento del débito laboral. Todo lo cual entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 de la CN, así como con los principios de integridad –y no regresión- en materia de seguridad social contenidos en los arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9º del Protocolo Adicional a la misma. (CNAT, Sala V, 5-07-06 autos “Lucero, Cristian G. c/Provincia ART y/o s/despido”).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso “Perez c/Disco”²⁰ ratificó la crítica que se está efectuando al criterio previsional del cálculo del Ingreso Base.

La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc c de la Ley de Contrato de Trabajo –texto según ley 24.700-, relativo a los vales alimentario, en cuanto niega a éstos naturaleza salarial, pues llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta en el caso, un tributo de justicia de la organización del trabajo subordinado, principio rector cuya observancia no es ajena a la empresa contemporánea.

²⁰ CSJNac. causa: Perez, Anibal c/Disco S.A. de fecha 01-09-2009

Se señaló en el fallo que "la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre del legislador le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional, y en el caso, el art. 103 bis inc. c no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste, siendo el distingo sólo "ropaje".

En el sentido apuntado la determinación del ingreso base es inconstitucional, como así su congelamiento en el tiempo.

VIII d) INCAPACIDAD PARCIAL / TOTAL PERMANENTE Y DEFINITIVA – INCONSTITUCIONALIDAD DEL TOPE PROPPORCIONAL

Atento a la incapacidad parcial/total permanente y definitiva que padece mi mandante, se reclama en los términos del artículo 14 inc. 2°, apartado a), la indemnización por esta disminución; atento el grado de incapacidad denunciado, el monto será calculado oportunamente una vez radicada la demanda en el juzgado.

La indemnización reclamada excederá con creces el techo indemnizatorio proporcional fijado por el artículo 14, apartado 2, inciso a última parte, también se viene a solicitar se declare la inconstitucionalidad para este caso concreto el tope indemnizatorio parcial y proporcional, ya que constituye un abuso en la tarificación, pues luego de efectuar el cálculo de indemnización, se le incorpora una nueva limitación parcial, que desnaturaliza el carácter reparador del resarcimiento tarifado.

Paso a fundamentar el planteo de inconstitucionalidad.

La LRT en su artículo 15, apartado 2, según DNU 1278/00, establece un tope indemnizatorio que determina que el monto total en concepto de resarcimiento por incapacidad total y definitiva no puede superar, actualmente, los \$180.000. Este tope es irrazonable, inconstitucional y por lo tanto violatorio del artículo 17 de la CN, dado que se produce una desproporción resultante de las operaciones aritméticas que establecen la ley y el monto que fija el tope legal.

En este caso, es aplicable plenamente el razonamiento expuesto por la CSJN en el caso "Vizzoti, Carlos A. c/AMASA SA s/despido" del 14/09/2004, en el sentido de que la limitación a la indemnización por la aplicación de los topes sólo es razonable n tanto no importe reducir en las del 33% la mejor remuneración del trabajador. También declaró lo inconstitucionalidad de la Resolución 7/89 del Consejo Nacional del

Salario Mínimo en el fallo del 16/12/93 en los autos "Vega Humberto c/consorcio de propietarios Edificio Loma Verde y/o, DT, 1994-A, pág 632

En este sentido la jurisprudencia declaró la Inconstitucionalidad del art. 14, ap.2, inc a) de la ley 24557, en cuanto establece un sistema de tope salarial en función del porcentaje de incapacidad del trabajador, ya que en las actuales circunstancias dicha norma resulta irrazonable, contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor, el derecho de propiedad y el principio de no regresión normativa" Agregándose también que "debe admitirse la demanda incoada por un trabajador contra una Aseguradora de Riesgos del Trabajo a fin de que le abone la diferencia, de la disminución que registró su resarcimiento por accidente laboral debido a la aplicación del tope previsto en la LRT, ya que la limitación congelada del art. 12 de la misma por más que aparezca en el caso con un monto poco importante, significa un recorte fundamental de fondo sin fundamento ni racionalidad alguna, máxime cuando dicho límite ha sido superado hace años por la realidad económica (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, unipersonal, 27/11/08, "Castellano, Ezequiel c/CNA ART SA")

También es inconstitucional el art. 14 segundo párrafo, por resultar contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas e labor –art 14bis CN- y del principio de no regresión normativa –art. 75, inc. 23 CN-

El tope general que sirve de regencia fue fijado en diciembre del año 2000 por el DNU 1278/2000, permaneciendo inalterado desde entonces, a pesar de la inflación y los aumentos salariales, que determinan que el tope parcial actúe desnaturalizando indemnizaciones como las de autos, basado en un salario normal para la época.

Esto significa que, en el caso debe prevalecer por sobre el tope proporcional, el cálculo de la prestación computando el ingreso base mensual, multiplicado por el número 53, el grado de incapacidad y por el coeficiente de edad dividido por la edad de la víctima.

VIIIe) INCONSTITUCIONALIDAD DEL PAGO EN RENTA

Reitero, en el caso que VE no condene por la responsabilidad civil a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y solamente lo haga en los términos de la Ley de Riesgos de Trabajo, la obligada al pago deberá abonar una parte en pago único, y la otra prestación en cuotas.

Al respecto, esta parte solicita que la indemnización por incapacidad total, permanente y definitiva, se abone en forme íntegra en un pago único, por lo que se

peticiona que se decrete la inconstitucionalidad del pago en renta (arts. 15, inc. 2º y 19 de la ley 24.557).

La forma de pago de la indemnización por incapacidad total y definitiva es inconstitucional por varios motivos.

Uno de ellos, es que atenta contra lo preceptuado por el art. 16 de la C. Nacional, pues en igualdad de condición, pues si una persona se encuentra con una lesión que provoca una incapacidad cuya graduación no supera el 50% podrá el damnificado percibir el monto de la misma en un pago único, no ocurre lo mismo, cuando la incapacidad es superior al 50%; que el pago se efectúa mediante las prestaciones mensuales, a través de una renta periódica o un retiro programado.

Esta situación es la del caso de marras, en donde el actor debe elegir en el pago de una renta vitalicia o un régimen de retiro programado.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha expresado que la igualdad es igualdad de circunstancias (Fallos 199.268), por lo tanto, en iguales circunstancias, dos personas con incapacidad, a uno de ellos, se le abona en un solo pago, y al otro en renta mensual, con el agravante que la persona que se encuentra con un grado de incapacidad que la inhabilita para trabajar para el resto de su vida, deberá percibir la indemnización en cuotas.

No es ningún argumento válido para refutar esta posición que a la persona que se le determina una incapacidad definitiva y total se le abone, además, el haber jubilatorio por invalidez, pues toda personas inscripta en el Sistema Previsional de nuestro país, en el caso de padecer una afección en su salud que fuera graduada mayor al 66% será beneficiario de la Jubilación por invalidez, tal como sucede en autos.

Por lo tanto, ha quedado demostrado el trato discriminatorio que se le da a una persona que se le determina un grado de incapacidad mayor al 66%; para percibir dicha indemnización, con respecto al otro con una incapacidad menor.

Asimismo las normas cuestionadas son violatorias del artículo 14bis de la C. Nacional, pues atenta contra el vínculo familiar al abonar una prestación en forma mensual cuyo monto no alcanza al salario que percibía el actor.

Así, se ha fallado que "...las prestaciones previstas en renta, pueden desnaturalizar la finalidad para la cual fueron establecidas y a través de ello se configure en forma indirecta, pero significativa, una desprotección tal que torne a las normas aplicables en contrarias por la inequidad de la solución a las disposiciones contenidas en la C. Nacional para la tutela de los trabajadores y fundamentalmente, menoscaben las garantías emergentes de los Tratados que en el Inc. 22 ha incorporado al contenido de nuestra ley fundamental, reconociendo idéntico nivel a los que allí se enuncian, aquellos que derivan de fuentes económicas, sociales, culturales, con la amplitud suficiente como para que cada integrante de un cuerpo social pueda restaurara

su dignidad y capacidad de desenvolvimiento ante cualquier situación que lesiones sus derechos" (CNAT, Sala II, 10/09/99, "Cyment Cyrla c/Generali Argentina Comp. de Seg. Patrim. SA s/Acc. de Amparo").-

En este orden de ideas, los magistrados del fuero del trabajo, han considerado que la forma de abonar la indemnización por incapacidad total y definitiva en cuotas mensuales, es violatoria del derecho de propiedad que establece nuestra Constitución en los arts. 17 y 19.-

Poniendo fin al debate que había tenido este sistema de pago cuantificado la Corte Suprema en los casos "Milone"²¹ declaró su

VIIIe) LEGITIMACION PASIVA DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO -DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS COMISIONES MEDICAS. DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL FUERO FEDERAL (ARTS. 21, 22, 46, 50 de la ley 24.557 y Dctos. 717/96; 1278/00; 410/01):

Siguiendo con el criterio de subsidiaridad, se solicita a V.S. que condene a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, en consecuencia, si se condenara a la ART en base al régimen legal establecido por la ley 24.557, peticiono que el Magistrado actuante que declare la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas y su apelación ante la Cámara Federal de Seguridad Social, que se legislan en los artículos 6º, 21, 22, 46 y 50 con las respectivas modificaciones introducidas por el decreto 1278/2000; y los decretos 717/96 y 410/2001, por las consideraciones de derecho que paso a exponer.

Las normas invocadas regulan el procedimiento para reclamar ante las Comisiones Médicas, en el caso en que las aseguradoras de riesgos de trabajo no reconozcan el daño que padece el damnificado o la disidencia se centrara en la graduación de la incapacidad.

Todo este procedimiento es inconstitucional, pues el mismo surge de decretos dictados por el P.E. en clara violación a la división de poderes, pues se ha legislado, atribuyéndose facultades legislativas que no le competen y, a su vez, legislando en materia que es exclusivamente de las Provincias, infringiéndose los artículos 75, inc. 12, 76 y 121 de la C.N.

Además, al resolver sobre los casos planteados, se le otorga a las Comisiones Médicas facultades judiciales y, como las mismas se encuentran bajo la órbita del P.E., se transgreden los artículos 16, 18, 108 y 109 de nuestra Carta Magna y la doctrina de la CSJN.-

²¹ CSJNac. Autos: Milone, Juan A. c/Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/Accidente - Ley N° 9.688

La CSJN tuvo ya la oportunidad de limitar los alcances de la actuación de los órganos dependientes de la Administración en asunción de facultades jurisdiccionales.-

En efecto, en los autos "Angel Estrada y Cia SA c/Secretaría de Energía y Puertos " (05/04/2005) *"...la Corte aprovecha la oportunidad para sentar una serie de principios y criterios que configuran una verdadera política judicial, no dejando, prácticamente cuestiones de hermenéutica fundamentales sin abordar. Ello implica contribución a la seguridad jurídica..."*(Juan Carlos Casagne, "Las facultades jurisdiccionales de los entes reguladores (A propósito del caso Angel Estrada", LL, 2005-C, pag. 736).

En el caso "Angel Estrada" se considero que: "el principio constitucional de defensa en juicio previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales –art.109-, quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad este asegurada, el objeto económico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente..." (CSJN. CSJN, 05/04/2005, "Angel Estrada y Cia. SA s/Resolución Nº 71/96 - Sec. Ener. y Puertos").

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el procedimiento especial de la LRT cuando se pronunció en los autos: "Castillo"²², declarando la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley de Riesgo de Trabajo.

En sus fundamentos, el Alto Tribunal, en el considerando 4^a, menciona la doctrina imperante en dicho Tribunal al señalar: *"... Que según lo esclareció esta Corte para octubre de 1917, y lo sostuvo de manera constante, las responsabilidades por accidente de trabajo a que se refiere la ley numero 9688 y que nacen hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros son de carácter común (Fallos, 126:315, 324 y 325:328; asimismo : Fallos, 129:223 151:315; 162:79; 184:390; 228:537; 239:239; 242:182; 245:174, entre muchos otros), vale decir, resultan sancionadas por el Congreso con arreglo a las previsiones del aet. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional –actual art. 75 inc 12 (Fallos, 248:781, 782 considerando 1 y sus citas)..."*

También se afirmo en la sentencia del Alto Tribunal que:

"...De ahí que, desde su instalación, la corte haya sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el art. 100 –actual art. 116- (Fallos, 117:170, 190:170, 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la Ley 27, e incluso la Ley 48 para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del Tribunal (art.15) el art. 121 de la Constitución Nacional (originario art. 104) se emplaza en la misma línea..."

En este orden de ideas no sorprende la conclusión a la que arriba la Máxima Magistratura de la Nación, en el considerando 5^a al expresar: *"Que, por ende, no*

²² CSJNac. Autos "Castillo, Angel Santos c/ Ceramica Alberdi SA, de fecha 7 de septiembre de 2004

es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12".

El Superior Tribunal de la República concluyó: *"que la Ley de Riesgo ha producido consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla con la misión que le es propia y desnaturalizar la del Juez federal al convertirlo en magistrado de derecho común".*

La consecuencia de este trascendente fallo es que, de aquí en adelante, las víctimas laborales pueden recurrir directamente ante el Juez del Trabajo de cada jurisdicción, para que a través de las reglas de un procedimiento laboral, puedan accionar directamente contra la ART, para percibir las indemnizaciones tarifadas de la LRT. Esta posición fue ratificada y ampliada por la Máxima Magistratura de la Nación, en los casos "Venialgo"²³ y Maechetti"²⁴, respectivamente.

En el caso "Marchetti", la Dra. A. Beiró de Goncalvez se remitió a la doctrina del caso "Castillo" señalando:

"en razón de la naturaleza de derecho común de la legislación en materia de riesgo de trabajo incumbe señalar que el caso resulta ajeno a la excepcional competencia de la Justicia Federal". Agregando también la citada funcionaria, que siendo un "supuesto en que se demanda una "entidad de derecho privado" como son las aseguradoras de riesgo de trabajo, a propósito de un planteo basado en disposiciones de naturaleza común, laboral o de la seguridad social, que el presente reclamo deberá proseguir por ante el Juzgado Nacional del Trabajo".

La doctrina sentada en los casos "Venialgo" y "Marchetti", es coherente con el criterio ya expuesto por la corte en "Castillo", en el sentido que siendo la materia de accidentes de trabajo de derecho común e interviniendo en las mismas sujetos de derecho privado, como son los trabajadores y las ART, no se justifica la federalización del procedimiento, ni por lo tanto la intervención de la Justicia Federal de la Seguridad Social, sino que le corresponde intervenir a la Justicia Nacional del Trabajo.

Solicito se declare las inconstitucionalidades peticionadas.

X) LIQUIDACION:

Será cuantificada cuando la causa se encuentre radicada en el Juzgado.

XI) PRUEBA:

La misma será presentada por escrito separado una vez que la causa se encuentre radicada en el juzgado.

XII) DERECHO:

²³ CSJN, 13.03.2007, autos: "Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo del Trabajo y otro

²⁴ CSJNac. Autos: "Marchetti, Néstor Gabriel c/ La Caja ART SA s/Ley 24.557", 4 de diciembre de 2007

Fundo la acción en los artículos 512, 1109 y 1113 del Código Civil, arts. 75, 76 de la LCT, ley 19587; su decreto reglamentario, Ley de Riesgos de Trabajo, artículos 14, 14bis, 16, 18, 19 y conc. de la Constitución Nacional; y jurisprudencia citada.

XIV) FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL:

Siendo ésta la primera oportunidad procesal para hacerlo, dejo formuladas reservas de hacer uso de la vía del recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Caso Federal se deja planteado, atento que ante la eventualidad de que la sentencia de grado no hiciere lugar a lo peticionado, se encontrarían gravemente conculcados derechos y garantías de raigambre constitucional tales como el debido proceso, defensa en juicio y derecho de propiedad.

XV).- PETITORIO.-

Por todo lo expuesto solicito:


- 1)- Se me tenga por presentado en el carácter invocado, con domicilio legal constituido, se me otorgue la correspondiente intervención de ley.-
- 2)- Se corra traslado de la demanda por el término de ley.-
- 3)- Se declaren las inconstitucionalidades incoadas.-
- 4)- Se acepte la prueba documental ofrecida. Se reserve en caja fuerte del Juzgado la documentación original acompañada, dejándose copia en autos. Se tenga por denunciada la documental en poder de terceros.-
- 5)- Se corra traslado de la demanda por el término de ley.-
- 6)- Se tenga presente la reserva del caso federal.-
- 7)- Oportunamente, se haga lugar a esta acción entablada, en todas sus partes, con más sus intereses, gastos y costas.-

PROVEER DE CONFORMIDAD.-

JUSTICIA.-

JOSE LUCAS MIRANDE
ABOGADO
MAT. PROF. 5654 L° L F° 150
MAT. CONCEP. 1495 L° 01 F° 41
MAT. FED. 7° 112 F° 501

RECIBIDO 08-11-13 HORA: 10,00


LIDIA ESTELA VILLAGRA
PROSECRETARIA JUDICIAL
Mesa de Entradas y Notificaciones
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

**MERCADO RUBEN OSCAR C/ ALPARGATAS SAIC Y OTRO S/
ENFERMEDAD ACCIDENTE / PROFESIONAL - Expte. N° 480/13**

FECHA 11/11/2013

HORA: 10:14 Eduardo Delgado

**ADJUNTANDO: DEMANDA EN DIECIOCHO FOJAS CON
DECLARACION JURADA.-**


LIDIA ESTELA VILLAGRA
PROSECRETARIA JUDICIAL
Mesa de Entradas y Notificaciones
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

LU, 11 NOV 2013 12:33

JUZ. CON. Y TRAM. I

Lo mencionado en el pase que antecede



JUICIO: "MERCADO RUBEN OSCAR C/ ALPARGATAS SAIC Y OTRO
S/ ENFERMEDAD ACCIDENTE / PROFESIONALEXPTE: 480/13".

CONCEPCIÓN, 18 de noviembre de 2013

Previo a considerar: Acompañé recaudos legales por
apersonamiento, Documentación original, copias para el expediente y
copias para traslado. traslado, como así también deberá acreditar la
personería invocada. A la oficina. ~~APP~~

EN 19 / 11 / 13 ESTUVO A LA OFICINA
ART. 163 C. P. C. C.



Poder Judicial de Tucumán
Secretaría Administrativa

Poder Ad litem N° 02 - 002405

N° Control



1303081041092

Ante esta Secretaría Administrativa comparece:

Datos Personales

Apellido y Nombre: MERCADO RUBEN OSCAR

Nacionalidad: ARGENTINO

Estado Civil: CASADO

Profesión: JUBILADO

Fecha de Nacimiento: 25/05/53

Domicilio: LOTE 12

Localidad: SANTA ANA

Provincia: TUCUMAN

DNI/LC/LE N° 10813556

Y haciendo uso de la facultad que le confiere el Código de Procedimiento del Trabajo (Ley 6204) en su Art. 26 otorga PODER ESPECIAL a favor del:

Dr/a: MIRANDE JOSE LUCAS DNI/LC/LE N° 27211285 Matricula N°: 1495 Tomo: 01 Folio: 41

Dr/a: MIRANDE ENRIQUE DNI/LC/LE N° 17269789 Matricula N°: 73 Tomo: 01 Folio: 02

Para que lo represente ante los Tribunales del Trabajo del Centro Judicial Concepción y en todo lo que tenga relación con el juicio que interpondrá contra: LA CAJA ART S.A. Y ALPARGATAS SAIC y cuyo objeto es INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD DEL TRABAJO

Y declara: que a los efectos y en la forma prevista por el Art. 26 de la Ley 6204 le confiere poder suficiente para demandar, conciliar, proseguir el juicio, interponer recursos, ejecutar la sentencia y realizar todos los demás actos que estimara convenientes y útiles para la defensa de sus derechos y de sus intereses y para que tanto en lo principal, incidentes y dependientes, haga y practique lo que el otorgante haria y practicase siendo presente. Con lo que se da por cumplimentado el acto previa lectura y ratificación por ante actuario, la firma el compareciente por ante mi que certifico. ----

Concepción, 11/03/2013

Firma Otorgante

Aclaración del Otorgante

Firma Funcionario
Sec. Administrativa
ó Deleg. Administrativa

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Sello

INFORME MEDICO LABORAL

Nombre y Apellido: Mercado Rubén Oscar.

Edad: 59 años.

D.N.I: 10.813.556

Domicilio: Lote 12- Santa Ana.

Estado Civil: Casado, 8 hijos.

Ocupación: Operario textil.

Antigüedad laboral: 38 años

Motivo de Consulta: Solicita determinación de incapacidad laboral para ser presentado ante autoridades de la ANSES.

Enfermedad Actual: Paciente que refiere el comienzo de sus síntomas en el año 2004 con la aparición de un cuadro doloroso a nivel de columna cervical que se irradia a ambos miembros superiores y que se acompaña de vértigos, parestesias en los mismos con disminución de la fuerza muscular, al mismo tiempo refiere la aparición de dolor en hombro derecho con limitación en todos los movimientos del mismo, en especial en la abdoelevación. Por esa época comienza un cuadro doloroso a nivel de columna lumbosacra, que se irradia a miembros inferiores y se acompaña de parestesias, impotencia funcional dolorosa, con marcha disbásica por disminución de fuerza muscular, cuadros estos que se intensifican durante la jornada de trabajo y que le impiden cumplir con sus tareas laborales, debido a la severidad de su cuadro clínico. Refiere además la aparición de molestias, dolores en ambas rodillas que aumentan de intensidad, con limitación funcional por dolor que motiva la consulta en el servicio médico de la empresa, desde donde es derivado al traumatólogo, quien solicita estudios radiológicos e indica tratamiento médico y fisioterapia, arribando el diagnóstico de gonartrosis bilateral.

Antecedentes de Enfermedad Actual: Lo referido al comienzo de su cuadro clínico en el año 2004. Hipertensión arterial detectada a los 50 años de edad con episodio de encefalopatía hipertensiva que motivó su internación en terapia intensiva durante 7 días y suspensión laboral por 30 días.

Antecedentes Quirúrgicas: No refiere.

Antecedentes Personales: Funciones fisiológicas: en lo normal
Hábitos tóxicos: no refiere.

Antecedentes Familiares: Hipertensión arterial.

Examen Físico General: Lúcido afebril, colabora con el interrogatorio, orientado auto y alopsíquicamente, sin signos neurológicos focales al momento del examen.

Examen Segmentario

Cabeza y Cuello: Normocéfalo, implantación pilosa normal para la edad, facies ansiosa. En cuello no se palpan adenopatías ni agrandamientos tiroideos.

24

Aparato Respiratorio: Tórax simétrico, a la auscultación disminución de la ventilación pulmonar bilateral, murmullo vesicular disminuido, algunos estertores húmedos en ambos campos pulmonares.

Aparato Cardiovascular: A la auscultación 1° y 2° ruidos presentes, silencios libres F.C 76 X minuto, regular e igual P.A 160/100 mmHg.

Abdomen: Blando depresible, no visceromegalias.

Aparato Genito Urinario: S/P

Aparato Osteoarticular: Se constata a la palpación una contractura muscular paravertebral en región cervical y lumbosacra con limitación funcional dolorosa en los movimientos de flexión, laterales y de rotación en columna cervical y lumbosacra.

Miembros Superiores: Limitación funcional dolorosa de hombro derecho con crepitación palpable en los movimientos activos y pasivos del hombro.

Miembros Inferiores: Dolor a la movilización activa y pasiva.

Lasegué positivo bilateral. Hiporeflexia patelar bilateral.

Hipotrofia muscular bilateral en miembros inferiores con disminución de la fuerza muscular. Se observa fasciculaciones en muslos. Tono y trofismos disminuidos. Se constata limitación funcional en ambas rodillas a la flexoextensión forzada.

Tratamiento Actual: A.I.N.E.S. Antihipertensivos, F.K.T.

Consideraciones Médicas Laborales: Del examen médico realizado, los métodos complementarios de diagnóstico y certificados médicos aportados se concluye que el paciente **Mercado Rubén Oscar**, de 59 años de edad, **DNI 10.813.556** se encuentra afectado de:

- 1- Incapacidad bilateral del nervio espinal con déficit sensitivo motor severo por compresión multiradicular, en especial a nivel de C3- C4, C5 - C6 y C6- C7.con una incapacidad laboral del 7,5%
- 2- Limitación funcional de columna cervical. .con una incapacidad laboral del 7,5%
- 3- Lesión del nervio espinal a nivel de L4-L5, L5-S1 .con una incapacidad laboral del 7,5%
- 4- Limitación funcional de columna lumbosacra. .con una incapacidad laboral del 7,5%
- 5- Limitación funcional de ambas rodillas por gonartrosis bilateral. .con una incapacidad laboral del 7,5%
- 6- Hipoacusia neurosensorial bilateral. .con una incapacidad laboral del 7,5%
- 7- Limitación funcional de ambos hombros. .con una incapacidad laboral del 15%
- 8- Varices en miembros inferiores. .con una incapacidad laboral del 20%
- 9- Depresión neurótica grado II. .con una incapacidad laboral del 7,5%

Las patologías enunciadas guardarían una relación de causalidad con el trabajo realizado correspondiéndole una incapacidad laboral de mas del 70% (sententa) en forma total,permanente y definitiva

Dr. ROQUE HUMBERTO ZARIFE
CLINICA GENERAL M.P. 3292
MEDICO DEL TRABAJO M.N. 5359
C.U.I.T. 20-12685900-2

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO

Dictamen de Comisión Médica

Comisión Médica Nº: 001

Localidad: Tucumán

Fecha: 21/08/2012

DICTAMEN DE COMISION MEDICA

TRAMITE: Retiro por Invalidez

Administradora: ANSES
UDAI : CONCEPCION
C.U.I.L./C.U.I.T: 20-10813556-6
Fecha de Solicitud: 20/07/2012
Expediente de Origen Nº:
024-20-10813556-6-742-000001

Documento de Identidad: 10813556

Edad (a la fecha del Dictamen): 59
Expediente Nº: 001-P-01158/12

Apellido y Nombre del Afiliado: MERCADO, RUBEN OSCAR
Domicilio Legal : B° SANTA ROSA EX LOTE 12
Localidad y Código Postal : INGENIO SANTA ANA 4155
Provincia : TUCUMAN

INTRODUCCION

La Comisión Médica Actuante aprueba el siguiente Dictamen, en cumplimiento del procedimiento del art. 49 de la Ley 24.241 en Sesión Ordinaria del día de la fecha. Dicho artículo establece además la recurribilidad del presente ante la Comisión Médica Central, bastando para ello hacer una presentación en la sede de esta Comisión, dentro de los cinco (5) días de notificado el Dictamen, consignando que se apela el mismo.

FUNDAMENTOS

El/La peticionante aportó documentación médica que obra en el presente expediente en la que invoca: Hipertensión Arterial varices depresión. TAC de Encéfalo normal Informe del psicólogo con trastorno depresivo. Informe e Rx Columna cervical Y Lumbosacra con Espóndiloartrosis y pinzamiento del quinto espacio lumbar. Rx de Rodillas con incipiente signos de artrosis de ambas rodillas La Comisión Médica actuante realizó el Cuestionario Guía para la orientación diagnóstica de las enfermedades psiquiátricas de interés previsional.

Realizado el examen médico, previa identificación del peticionante, quien refirió sus antecedentes personales, hereditarios, familiares, enfermedades y trastornos actuales; se confeccionó la correspondiente historia clínica que obra en el expediente, de su registro se mencionan aquellos datos, signos positivos y negativos que hacen al diagnóstico.

Antecedentes personales: Niega Cirugías Tabaco: Niega Alcohol: Niega

Tarea del afiliado sobre la base de sus afirmaciones: OPERARIO TEXTIL . En actividad.

Antecedentes de la enfermedad actual: Hipertensión desde larga data medicado con Adalat oro.

Niega Diabetes . Artrosis de Columna y de Hombros de larga data medicado con AINE

Medicación actual: ADALAT ORO- AINE.

Examen físico:

Peso: 75 kg Talla: 1.65 cm Piel y Faneras: Tibia, húmeda elástica, coloración acorde a su raza
 Tejido celular subcutáneo: Cantidad y distribución normal conforme a biotipo Cabeza y cuello: Sin particularidades Adenopatías cervicales: No se palpan. Mamas/Tetillas: Aspecto: Desarrollo normal de acuerdo a sexo y edad Palpación: De consistencia normal para la edad. Aparato cardiovascular: Ritmo: Regular Amplitud: Igual Tensión: Aumentada Presión arterial: 180 mm Hg de máxima 100 mm Hg de mínima Auscultación cardíaca: Se auscultan: Primer ruido aumentado de intensidad Ritmo de los ruidos: Regular Ruidos de soplo: No se auscultan Arterias periféricas: Pulsos pedios y tibiales post. presentes y simétr. Sistema Venoso: Se constata Flebopatía con golfos varicosos en terreno de safena Interna y externa con edema, leve hiperemia distal de miembros sin úlceras Abdomen: Cicatrices Quirúrgicas: No se aprecian Hernias y eventraciones: No se constatan Aparato genito-urinario: Puño percusión: Negativa, puntos ureterales indoloros. Organos genitales externos: Sin particularidades, acordes con sexo y edad. Sistema osteo-articular: . Región dorsolumbar: Limitada en Flexión 80° (1%) Rotación Der. 20° (2%) Rotación Izq. 20° (2%) TOTAL 5%. Hombro derecho limitado en Abdoelevación 110° (2%) Elev. Anterior 110° (2%) Elev. Posterior 20° (1%) Rotación Externa 60° (3%) TOTAL 8%. Hombro izquierdo limitado en Abdoelevación 110° (2%) Elev. Anterior 110° (2%) Elev. Posterior 20° (1%) Rotación Externa 70° (2%) TOTAL 7% Observaciones: Tono, Trofismo, Reflejos y Fuerza muscular conservada.-. EVALUACION DEL ESTADO PSIQUICO DURANTE EL EXAMEN FISICO: No objetiva elementos psicopatológicos en el examen, en consecuencia no requiere otra evaluación de la especialidad
 Datos obtenidos de los estudios aportados: .

La Comisión Médica actuante consideró necesario solicitar estudios complementarios:

RX DE TORAX: Sin lesión parenquimatosa. Diafragma y Pleuras normales. Imagen Cardiovascular: De dimensiones y configuración normales. Aorta prominente.-

INTERCONSULTA OFTALMOLOGICA: Agudeza Visual con corrección Ojo Izquierdo: 10/10. Ojo Derecho: 10/10. Biomicroscopia: AO pinguécula. Tensión Ocular: ambos ojos: 16 mm. hg. Fondo de Ojo: Signos de Hipertensión Arterial Grado II(dos).-

ELECTROCARDIOGRAMA: Ritmo Sinusal. Repolarización con ondas T y segmento ST sin patología. ESTUDIO QUE NO DETECTA PATOLOGIA.-

ECODOPPLER CARDIACO: Septo Interventricular: 15 mm.. F. Eyección: 53%. Ventrículo izquierdo de diámetros, motilidad, función sistólica normal. Válvulas y Pericardio sin patología. HIPERTROFIA SEPTAL ASIMETRICA NO OBSTRUCTIVA.-

INTERCONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA: Integridad de Membrana Timpanica. Se efectuó audiometría con Logo, Sisi. Hipoacusia Perceptiva por Ruido. Audiometría con caídas para el Oído Derecho de (25-25-35-60)=145 y para el Izquierdo de (25-25-35-60)=145, en la suma de las frecuencia de 500 a 4000. Corresponde 7.09%.-

PSICODIAGNÓSTICO: En el 2004 sufrió un ACV, luego de la rehabilitación recuperó la movilidad del brazo y de la pierna. Es hipertenso, padece de artrosis en la rodilla y en la zona cervical, debido a los dolores se encuentra actualmente con licencia en la fábrica. Hace 38 años que trabaja en la empresa, no puede manejar la maquinaria, realiza tareas manuales, lo cual lo hace sentir un inútil. Sufre de dolor de cabeza e insomnio, se siente incómodo en el trabajo, donde la supervisora le exige un nivel de producción al que no puede llegar. A veces no desea vivir y siente ganas de llorar, lo cual se intensificó hace un año cuando falleció el hermano. Afirma que fue a una sola sesión, con una psicóloga y que no toma medicación para la depresión. El hijo menciona que la madre se fue a Bs As, debido a que es mala la convivencia con el padre. Lo aturde el ruido de las máquinas y la música.

COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO: Se presenta adecuadamente vestido, acorde a sexo y edad. Es acompañado por el hijo, quien brinda información sobre el comportamiento del paciente. Termina rápidamente las pruebas, situación que le genera ansiedad intensa. Se angustia cuando recuerda al hermano que falleció. ASPECTO INTELECTUAL: Se observa un rendimiento intelectual empobrecido. Las funciones lógicas del pensamiento: abstracción, análisis y síntesis no presentan alteraciones groseras. Las funciones de percepción y atención no presentan dificultades. La memoria auditiva presenta alteraciones. La coordinación viso motriz presenta indicadores de compromiso orgánico en su funcionamiento, en el área de la motricidad fina. ASPECTO EMOCIONAL: Se observan dificultades por parte del yo para controlar la impulsividad, que suele fracasar y descargar la misma en el medio que lo rodea. No encuentra satisfacción en las relaciones interpersonales por lo cual prefiere abstraerse de las mismas y buscar la misma en el aislamiento. El estado de ánimo es fluctuante, lo cual muestra dificultad en la expresión de emociones. La muerte del hermano ha ocasionado la desorganización de una estructura de personalidad vulnerable, por lo cual los recursos para elaborar dicho duelo, son precarios y dificultan dicho proceso. DIAGNOSTICO: Los indicadores observados conducen a inferir DEPRESION NEUROTICA GRADO II(DOS).-

Consideraciones médico previsionales Del examen practicado al beneficiario surge que el mismo padece de :

HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESTADIO II: Por los valores elevados registrado , la medicación indicada , al resultado de los estudios efectuados . Corresponde 30%

FLEBOPATIA ESTADIO III: Como surge de sus antecedentes las Varices constatadas en examen físico de los dos sistemas superficiales . Corresponde 20%.-

LIMITACION DE HOMBRO DERECHO: Por la documentación obrante la limitación constatada. Corresponde 8%

HIPOACUSIA BILATERAL: Por la documentación obrante los valores del Audiograma. Corresponde 7.09%

LIMITACION DE HOMBRO IZQUIERDO: Por la documentación obrante la limitación constatada. Corresponde 7%

LIMITACION FUNCIONAL DE COLUMNA DORSO LUMBAR: Por la documentacion obrante la limitación constatada. Corresponde 5%.-

DEPRESION NEUROTICA GRADO II: Como surge de sus antecedentes, la documentación presentada, al Psicodiagnóstico solicitado por la Comisión Medica a su prestador . Corresponde 5%.-

Que por todo lo expresado, consecuencia del examen, como así también de documentación médica aportada, la Comisión Médica Actuante se halla en condiciones de determinar el grado de incapacidad que el peticionante presenta y en tal sentido dictamina, que a partir de las afecciones evaluadas y ponderadas es el siguiente, con la metodología que corresponde de acuerdo al Decreto 478/98:

- HIPERTENSION ARTERIAL ESTADIO II	30,00 %
- FLEBOPATIA ESTADIO III:	(20,00 % del 70,00 %) ... 14,00 %
- LIMITACION DE HOMBRO DERECHO:	(8,00 % del 56,00 %) ... 4,48 %
- HIPOACUSIA BILATERAL:	(7,09 % del 51,52 %) ... 3,65 %
- LIMITACION DE HOMBRO IZQUIERDO	(7,00 % del 47,87 %) ... 3,35 %
- LIMITACION FUNCIONAL DE COLUMNA DORSO LUMBAR:	(5,00 % del 44,52 %) ... 2,23 %
- DEPRESION NEUROTICA GRADO II:	(5,00 % del 42,29 %) ... 2,11 %
	59,82 %

Factores Complementarios

Edad:

Nivel Educativo:

(7,50 % del 59,82 %) ... 4,49 %
(7,50 % del 59,82 %) ... 4,49 %

TOTAL:

68,80 %

CONCLUSIONES

VISTO: la solicitud de beneficio formulada y CONSIDERANDO: La Historia Clínica, el examen físico, las constancias y los estudios obrantes en el Expediente, la Comisión Médica Actuante, Dictamina que, el/la Sr/Sra MERCADO, RUBEN OSCAR DNI 10813556 presenta un porcentaje del 68,8% (SESENTA Y OCHO CON OCHENTA) de incapacidad laboral por lo que Si reúne las condiciones exigidas en el inciso (a) del Art. 48 de la Ley 24.241 para acceder al Beneficio de Retiro Transitorio por Invalidez.

La presente resolución es comunicada a todas las partes intervinientes que determina la Ley.

Expediente 001-P-01158/12

Dr. Dante Ruben Rizo
Matr. P. Tuc. 2846
Comisión Médica 001 Tucumán
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo

El presente dictamen ha sido generado y firmado digitalmente por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con el ID: 105CC7999E401FF603257A5A0050DDBE

SI 665

La presentación del documento nacional de identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas comprendidas en esta Ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen.

Art. 13 - Ley 17.671

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DE:

MERCADO

Apellidos (si es mujer el de soltera)

Ruben

Oscar

Nombres

Clase **1953** N° **10.813.556**

Sexo **VARON** **MUJER**

(tachar lo que no corresponda)



Impresión dígito
pulgar derecho



Ruben B. Mercado
Firma del interesado

Nacido/a el **25** de **Mayo**
de **1953** en **Santa Ana**
Part. Depto **Rio Chico**
Provincia **Tucumán**
Nación **Argentina**
C. I. N°
Expedida por

DOMICILIO

Calle **Cofe** N° **12**
Ciudad **Pueblo Santa Ana**
Part. Depto **Rio Chico**
Provincia **Tucumán**
Of. Secc. **Villas Hileret**
Fecha de entrega **18/3/75**
sello

Firma del Tit. Sec.

PARA ARGENTINOS
NATURALIZADOS

Naturalizado/a el de

de 19

Certificado de ciudadanía expedido por el

Juzgado

Secretaria N°

sello

Firma



Alpargatas S.A.I.C.

CUIT: 30-50052532-7

Azara 841 (1267) Capital Federal

LUGAR TRABAJO	Nº DE LEGAJO
Aguilares	00102963

PERIODO	FECHA INGRESO	NOMBRE Y APELLIDO	CATEGORIA	CUIL
02-Agosto-12	01.04.2012	RUBEN OSCAR MERCADO	Operario	20-10813556-6
FECHA DE PAGO	VALOR ANTIG.	VALOR ADIC CONV	ANTIG.RECONOCIDA	VAL.HORA SAL.BASICO
06.09.2012	1,83	0,00	37 años 10 meses	13,64
CONCEPTO		DIAS / %	IMPORTES	
COD.	DESCRIPCION		HABERES	DESCUENTOS
0006	Feriado	8,00	163,38	
0010	Horas Diurnas	50,85	693,59	
0011	Horas Nocturnas	3,70	61,05	
0023	Bonif. Antigüedad	55,33	101,25	
0025	Premio Presentism. %	0,20	172,51	
0097	Bonif. Personal %		6,65	
0107	Ajustes Varios		338,82	
0108	Ajustes Varios No Remun		1.564,79	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		2.564,31	
1201	Adelantos Desc.			1.564,79
1230	Asig.NoRem.AOT	13,00	173,29	
2002	Fondo Asistencia Social	1,00		21,70
2008	Cuota Sindical AOT	2,00		43,40
2103	Seguro Vida Optativo	36,00		52,85
/321	Aporte SIJP sobre sueldo			169,10
/325	Aporte SIJP sobre Sac			69,60
/351	Aporte INSSJP sobre suel			46,12
/355	Aporte INSSJP sobre Sac			18,98
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.			46,12
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac			18,98
MT96	SAC de Vacacio.no gozadas		213,72	
/S02	S.A.I.C.		632,73	
TOTALES			6.686,09	2.051,64

Obra Social : *OS Pers. de la Ind. Text

TOTAL NETO DEVENGADO	
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO con 45/100-----	\$ 4.634,45

BANCO DEPOSITO	FEC.PAGO	BANCO SIJP	REG.JUBILATORIO/AFJP	ART
Banco Francés -sueldos	10/09/2012	Bco.Francés	Sistema de Reparto	La Caja ART

(ART. 16 LEY 18596)

Página: 1

FIRMA